



CONTENDIENTES:

PRIMERO, SEGUNDO, CUARTO, DÉCIMO SEGUNDO Y DECIMOCTAVO, TODOS TRIBUNALES COLEGIADOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

MAGISTRADA PONENTE:

SILVIA CERÓN FERNÁNDEZ

SECRETARIA:

SOLEDAD TINOCO LARA

SECRETARIA ENCARGADA DEL ENGROSE:

ERIKA IVONNE CARBALLAL LÓPEZ

El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la
Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México,
en sesión de **quince de agosto de dos mil veinticuatro**,
emite la siguiente:

RESOLUCIÓN

1. Correspondiente a la contradicción de criterios suscitada entre el Primero, Segundo, Cuarto, Décimo Segundo y Decimoctavo, todos Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Primer Circuito.
2. El problema jurídico a resolver por el Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con

I. ANTECEDENTES DEL ASUNTO

- ¹ Quien acreditó su personalidad con el nombramiento expedido en su favor por el Titular de la Fiscalía General de la República, con fecha cinco de julio de dos mil veintitrés.



CONTRADICCION DE CRITERIOS 2/2024

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

en la Ciudad de México. Por acuerdo de cuatro de enero de dos mil veinticuatro, la Presidencia del entonces Pleno Regional, formó el expediente electrónico y lo registró con el número de contradicción de criterios **2/2024**; sin embargo, al advertir del oficio de denuncia, que éste se presentó de manera incompleta y que la parte denunciante omitió enunciar los asuntos a contender del Primero y Decimoctavo Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Primer Circuito, la requirió para que en el plazo de cinco días remitiera de forma completa y legible la denuncia en cuestión.

- 5. Desahogo de requerimiento.** Mediante oficio recibido el diez de enero de dos mil veinticuatro, en la Oficialía de Partes del entonces Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, la Titular de la Unidad Especializada en Asuntos Jurídicos de la Fiscalía General de la República, en cumplimiento al requerimiento en cita, remitió de manera legible y completa la denuncia de la posible contradicción entre los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados Primero, Segundo, Cuarto, Décimo Segundo y Decimoctavo, todos en Materia Administrativa del Primer Circuito.

- 6. Admisión de la contradicción de criterios.** Por acuerdo de doce de enero de dos mil veinticuatro, la Presidencia de ese Pleno Regional, admitió la denuncia de la posible contradicción de criterios. En esa misma actuación solicitó a

7. Cambio de denominación. Por Acuerdo General 38/2023 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se modificó la denominación de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur; y se reformaron diversas disposiciones relativas a su semiespecialización, competencia y domicilio, se aprobó el cambio de denominación y competencia del entonces Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, y su transformación como Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, a partir del dieciséis de enero de dos mil veinticuatro.

4

11. Amicus curiae. Por acuerdo de trece de febrero de marzo de dos mil veinticuatro, la Presidencia tuvo por recibido el escrito a través del cual una persona física realizó manifestaciones con el carácter de *amicus curiae*, en el sentido siguiente: “(...) *Respecto del tema de fondo de esta contradicción de criterios, deben prevalecer los precedentes del Primer y Cuarto Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Primer Circuito, esto es, que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa es incompetente para conocer de resoluciones de la Fiscalía General de la República que remueven a sus ministerios públicos, por tratarse de un órgano constitucionalmente autónomo, del que el citado Tribunal no puede conocer.---* (...) Así, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, sólo puede conocer de actos que deriven de las autoridades de las dependencias de la Administración Pública Centralizada y de las entidades de la administración pública paraestatal; sin que dentro de ellas se encuentre la Fiscalía General de la República, al ser un Órgano Público Autónomo, que es independiente del Poder Ejecutivo.--- (...) Luego, atendiendo a los razonamientos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los cuales aplicados por analogía, se llega a la conclusión de que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa no cuenta con competencia para conocer respecto de actos de la Fiscalía donde remueve a sus ministerios públicos, ya que el Tribunal tiene funciones



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

inherentes al Estado, como son las funciones jurisdiccionales en materia fiscal y administrativa que requieren ser atendidas no solo en beneficio de los justiciables sino de la sociedad en general.--- Por tanto, es indudable que como órgano autónomo el Tribunal Federal de Justicia Administrativa mantiene relaciones de coordinación con los demás poderes, órganos y organismos autónomos del Estado, no sólo para gestionar los elementos necesarios para su funcionamiento sino también para el logro de las atribuciones estatales encomendadas.--- En consecuencia, es que no se encuentra facultado para resolver controversias derivadas entre un particular y la Fiscalía General de la República, ya que dicho órgano público autónomo no forma parte del Poder Ejecutivo, ni depende o se subordina a éste, sino que mantiene con él una relación de coordinación en el ejercicio de facultades propias previstas constitucionalmente; y al no formar parte de la administración pública federal, en consecuencia conforme a los preceptos Constitucionales y legales transcritos, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa no está facultado para dirimir las controversias que se susciten entre dicho órgano público autónomo y los particulares con motivo de los actos que se le atribuyen.--- (...)”.

12. De igual manera, en proveído de veintisiete de junio de dos mil veinticuatro, la Presidencia de este Pleno Regional, tuvo por recibido el escrito a través del cual, la Titular de la Unidad Especializada en Asuntos Jurídicos, en representación del

Fiscal General de la República, realizó manifestaciones con el carácter de *amicus curiae*.

13. Aplazamiento. El diez de junio de dos mil veinticuatro, el asunto fue listado para verse en sesión del veintisiete siguiente, en la que se determinó su aplazamiento; por lo que se listó nuevamente para ser sesionado en esta fecha.

II. COMPETENCIA

14. Este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de criterios, de conformidad con lo señalado en los artículos 94, primer y séptimo párrafos, y 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 41 y 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 6 fracción I, 7 y 14 fracción I, del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales; 1°, fracción I, puntos 2 y 4 del diverso Acuerdo General 108/2022, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales; y 38/2023 que modificó la determinación de los citados Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur; en virtud de que la contradicción se suscitó entre tribunales colegiados en materia administrativa del Primer

17. Juicio de nulidad. Una persona física promovió juicio de nulidad en contra de la resolución emitida por el Coordinador General de Servicios Periciales de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República, a través de la cual se le notificó que su plaza fue suprimida y por tal motivo se dio por terminada su relación administrativa con la Fiscalía General de la República.

18. Sentencia de nulidad. Tocó conocer del asunto a la Décimo Primera Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la que lo admitió a trámite y seguido el procedimiento de ley, dictó sentencia, en la que sobreseyó en el juicio, al considerar fundada la causal de improcedencia planteada por la autoridad demandada, prevista en los artículos 8º, fracción II y 9º, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en relación con el numeral 73, fracción XXIX-H, primer y segundo párrafos, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos³, en

³ CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Art. 73.- El Congreso tiene facultad:

$$(\dots)$$

XXIX-H. Para expedir la ley que instituya el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, dotado de plena autonomía para dictar sus fallos, y que establezca su organización, su funcionamiento y los recursos para impugnar sus resoluciones.

El Tribunal tendrá a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública federal y los particulares.

Asimismo, será el órgano competente para imponer las sanciones a los servidores públicos por las responsabilidades administrativas que la ley determine como graves y a los particulares que participen en actos vinculados con dichas responsabilidades, así como fincar a los responsables el



CONTRADICCION DE CRITERIOS 2/2024

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

virtud de que la Fiscalía General de la República (parte demandada) era un organismo constitucional autónomo que no formaba parte del Poder Ejecutivo, ni estaba subordinado a éste, por lo que no era parte integrante de la Administración Pública Federal y por ende, sus actos no podían sujetarse a la jurisdicción de un tribunal contencioso administrativo.

19. Juicio de amparo directo. En contra de dicha resolución se promovió juicio de amparo directo, del que conoció el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, el que lo radicó con el número de expediente **190/2023**; y seguido el trámite correspondiente, lo resolvió en sesión de once de mayo de dos mil veintitrés, por unanimidad de votos, negando el amparo y protección de la Justicia de la Unión, con sustento en las consideraciones siguientes:

“(foja 10 de la sentencia respectiva)
(...)”

pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Federal o al patrimonio de los entes públicos federales.
(...)"

LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

“Artículo 8o.- Es improcedente el juicio ante el Tribunal en los casos, por las causales y contra los actos siguientes:

$$(\dots)$$

II. Que no le compete conocer a dicho Tribunal.

(...)

Artículo 9o.- Procede el sobreseimiento:

(...)

II. Cuando durante el juicio aparezca o sobrevenga alguna de las causas de improcedencia a que se refiere el artículo anterior.

(...)"

De la confrontación entre las consideraciones que sustentan la resolución reclamada y los conceptos de violación de la parte quejosa se tiene que la litis consiste en determinar si la responsable es competente para conocer de la resolución que establece que se da por terminada la relación administrativa de un servidor público con la Fiscalía General de la República.

Para dar solución a ese planteamiento, es oportuno tener en cuenta que la propia Constitución establece la competencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; el artículo 73, fracción XXIX-H, constitucional dispone: (Se transcribe) (...)

De acuerdo con el precepto citado, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa está dotado de plena autonomía para dictar sus fallos y establecer su organización.

Dicha norma otorga a dicho tribunal una doble función: por un lado, imponer sanciones a los servidores públicos cuando incurran en responsabilidad administrativa grave y, por otro, resolver las controversias entre la administración pública federal y los particulares.

Por lo que ve a la función jurisdiccional, la norma constitucional en consulta precisa que uno de los elementos a considerar por el legislador federal para fijar la competencia de ese tribunal atiende a la naturaleza de la autoridad emisora de los actos, limitándola a las controversias suscitadas entre las dependencias y entidades que integran la administración pública federal y los particulares.

Tal como estableció la responsable, conforme al artículo 102, apartado A, primer párrafo, de la Constitución, la Fiscalía General de la República es un órgano con autonomía constitucional, dotada de personalidad jurídica y patrimonio propio.

El alto tribunal ha definido que una de las características esenciales de los órganos constitucionales autónomos es la relativa a que guardan autonomía de los poderes primarios, esto es, del Ejecutivo, Legislativo y Judicial, ya que se trata de organismos que se encuentran a la par de aquellos.

Corroborar lo anterior, por el criterio que informa, la jurisprudencia P./J. 12/2008 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo XXVII, febrero de 2008, página 1871, que establece:



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS. SUS CARACTERÍSTICAS. (Se transcribe)
(...)

Como se advierte, los órganos constitucionales autónomos, aun cuando forman parte del Estado, no están subordinados a los poderes primarios, por lo que sus relaciones con éstos son de coordinación.

Lo hasta aquí expuesto deja en claro que la Fiscalía General de la República, en su carácter de órgano constitucional autónomo, no forma parte de la administración pública federal.

Por tal motivo, aun cuando la relación que guarda con sus servidores públicos sea administrativa y no laboral, como dispone el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución, no satisface la condición constitucionalmente establecida para que de las controversias que deriven de esa relación pueda conocer el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Consecuentemente, la impugnación de los actos de la Fiscalía General de la República generados con motivo de dicha relación jurídico administrativa no corresponde al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, toda vez que éstos se regulan por sus propias leyes.

Por tanto, es correcta la decisión de la sala responsable consistente en que el juicio de nulidad es improcedente contra la resolución que da por terminada la relación que mantenía la promovente con la Fiscalía General de la República, como órgano público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio.

$$(\dots)$$

No obsta a la conclusión alcanzada, el argumento de la parte quejosa consistente en que, en términos de la fracción XVI del artículo 3 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, corresponde a ese órgano jurisdiccional la resolución de asuntos en los que una de las partes sea un órgano constitucional autónomo.

Dicha norma dispone:

Artículo 3. El Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos

23. Juicio de amparo directo. En contra de dicha resolución, se promovió juicio de amparo directo, del que conoció el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, el que lo radicó con el número de expediente **788/2022**, y seguido el trámite correspondiente, lo resolvió en sesión de cuatro de abril de dos mil veintitrés, por unanimidad de votos, concediendo el amparo y protección de la Justicia de la Unión, con sustento en las consideraciones siguientes:

En principio, cabe resaltar que la consideración total en que se sustentó la Sala, a fin de concluir que no se actualizaba la competencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa



CONTRADICCION DE CRITERIOS 2/2024

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

para conocer de la resolución contenida en el expediente ***** de veintiocho de diciembre de dos mil veintiuno, emitida por el Director General de Mandamientos Ministeriales y Judiciales en suplencia por ausencia del Titular de la Policía Federal Ministerial de la Agencia de Investigación Criminal, de la Fiscalía General de la República, a través de la cual se suprimió la plaza de Comisario Investigador de la Policía Federal Ministerial (acto impugnado), se sustentó en el hecho de que la aludida Fiscalía es un órgano constitucionalmente autónomo que no forma parte de la Administración Pública Federal, sin que se dispusiera que el referido tribunal pudiera revisar alguno de sus actos; máxime que al tenor de lo dispuesto en el artículo 73, fracción XXIX-H, de la Constitución Federal, dicho tribunal solo puede conocer de controversias que se susciten entre la administración pública federal y los particulares.

Ahora bien, en relación con las características y notas distintivas de los **órganos constitucionales autónomos**, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que su origen es la idea de un equilibrio constitucional que evoluciona la teoría tradicional de la división de poderes (ejecutivo, legislativo y judicial) la cual no pierde su esencia, sino que se atiende a una distribución de funciones o competencias, de manera que se confiere a dichos entes jurídicos de derecho público ciertas facultades estatales fundamentales que no dependen orgánica, funcional o presupuestariamente de ninguna de las tres ramas tradicionales del poder, con la finalidad de hacer más eficaz el desarrollo de las actividades encomendadas al estado.

Así, el alto tribunal fue enfático al señalar que el hecho de que dichos organismos guarden autonomía e independencia de los poderes primarios no significa que no formen parte del Estado mexicano; máxime que su misión principal es atender necesidades torales, tanto del Estado como de la sociedad en general.

Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 20/2007, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXV, Mayo de 2007, página 1647. Registro: 172456, de rubro y texto siguiente:

**‘ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS. NOTAS
DISTINTIVAS Y CARACTERÍSTICAS. (Se transcribe)
(...)**

‘ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS. SUS CARACTERÍSTICAS. (Se transcribe (...))’

*Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10, fracción II de la Ley de la Fiscalía General de la República⁵, dicho órgano público autónomo, **forma parte del Sistema Nacional de Seguridad Pública.***

Al respecto, cabe señalar que el alto tribunal también se ha pronunciado en el sentido de que, en términos de lo dispuesto en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución General de la República, **la relación existente entre los elementos de los cuerpos de seguridad pública y el Estado no es de naturaleza laboral, sino administrativa, y que compete, por afinidad, al Tribunal Fiscal de la Federación (actualmente Tribunal Federal de Justicia Administrativa)** conocer de los conflictos derivados de la prestación de servicios de los, entonces, agentes de la Policía Judicial Federal adscritos a la Procuraduría General de la República, a través del juicio de nulidad, independientemente del origen de la controversia, es decir, ya sea con motivo de las prestaciones que les asisten en razón de ese vínculo o por cuestiones de responsabilidad administrativa.

A. El Ministerio Público de la Federación se organizará en una Fiscalía General de la República como órgano público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio.
(...)"

(...)"



CONTRADICCION DE CRITERIOS 2/2024

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

Es ilustrativa la tesis 2a. CLXI/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VIII, Diciembre de 1998, página 429. Registro: 194905, de rubro y texto siguiente:

‘COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS ASUNTOS DERIVADOS DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOS AGENTES DE LA POLICÍA JUDICIAL FEDERAL. CORRESPONDE, POR AFINIDAD, AL TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACIÓN. (Se transcribe) (...)’

De lo hasta aquí expuesto, no cabe duda para este tribunal, que **la naturaleza de la acción ejercida por la parte actora en el juicio de nulidad que se analiza es formal y materialmente administrativa**, dado que —se insiste— la relación existente entre los elementos de los cuerpos de seguridad pública (como lo es la Fiscalía General de la República), y el Estado no es de naturaleza laboral, sino administrativa, por lo que **compete, por afinidad, al Tribunal Federal de Justicia Administrativa** conocer de los conflictos derivados de la prestación de servicios de sus miembros, como en el caso acontece, independientemente del origen de la controversia; es decir, ya sea con motivo de las prestaciones que les asisten en razón de ese vínculo o por cuestiones de responsabilidad administrativa.

Ahora bien, no pasa inadvertido para este tribunal, el criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la **contradicción de tesis 27/2006-SS**, que en la parte que al caso interesa, es del tenor siguiente:

‘(...) la administración pública federal constituye la forma de organización del Poder Ejecutivo Federal, es decir, los órganos administrativos que compondrán a dicho poder el cual se deposita, en términos del artículo 80 de la Constitución Federal, en un solo individuo denominado ‘Presidente de los Estados Unidos Mexicanos’, que no forma parte de la citada administración pública federal, según se advierte palmariamente de los artículos 2o., 3o., 8o. y 9o. de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que establecen:

$$(\dots)$$

De esa guisa se desprende que los Tribunales Contenciosos Administrativos tienen competencia constitucional para dirimir sólo las controversias suscitadas entre los órganos de la administración pública federal del Poder Ejecutivo Federal, y los particulares, pues **los conflictos surgidos entre éstos y los Poderes Legislativo y Judicial de la Unión o sus órganos, o con los organismos autónomos**, no pueden ser resueltos por los tribunales de jurisdicción contenciosa administrativa, dado que no existe ninguna prevención constitucional en ese sentido, antes bien, se precisa con claridad la competencia limitada de esos tribunales.'

No obstante, debe resaltarse que dicho criterio se dirigió a dilucidar la competencia del entonces Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa para conocer del juicio de nulidad promovido contra la resolución del Órgano Interno de Control de la Cámara de Diputados, relativa a la imposición de sanciones administrativas a sus servidores públicos, dando origen al criterio jurisprudencial 2a./J. 49/2006, **invocado por la Sala del conocimiento**, que a continuación se reproduce:

20



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

SANCIONES ADMINISTRATIVAS A SUS SERVIDORES PÚBLICOS. (Se transcribe)

(…)

Como puede advertirse, la referencia del alto tribunal a los organismos autónomos, se vinculó a las controversias suscitadas entre los particulares y los otros poderes de la unión (legislativo y judicial), en atención a lo dispuesto en el artículo 11, fracción XII, de la entonces Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que establecía lo siguiente:

‘Artículo 11. El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas que se indican a continuación:

(…)

XII. Las que impongan sanciones administrativas a los servidores públicos en los términos de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos’.

No obstante, cabe señalar que actualmente, el artículo 3, fracción XVI, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de julio de dos mil dieciséis⁶, amplió el derecho a la tutela jurisdiccional, previsto en el artículo 17 constitucional, en el sentido de que dicho órgano jurisdiccional conocerá también de los juicios de nulidad promovidos contra las resoluciones definitivas que impongan sanciones administrativas a los servidores públicos en términos de la legislación aplicable, así como contra las resoluciones que decidan los recursos administrativos previstos en dichos ordenamientos, dictadas por los órganos constitucionales autónomos.

Por lo anterior, **no existe razón para considerar** que con base en la contradicción de tesis 27/2006-SS y el criterio jurisprudencial señalado, existe algún impedimento para que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa pueda conocer

⁶ ‘Artículo 3. El Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación:

(…)

XVI. Las resoluciones definitivas por las que se impongan sanciones administrativas a los servidores públicos en términos de la legislación aplicable, así como contra las que decidan los recursos administrativos previstos en dichos ordenamientos, además de los órganos constitucionales autónomos;

(…)”

Además, en acatamiento al segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prevé el derecho de toda persona a que se le administre justicia, por ser ese órgano jurisdiccional, de acuerdo con las facultades de que está investido, el más afín para conocer de la demanda relativa, al ser un miembro de los cuerpos de seguridad pública quien efectúa el reclamo, es que le corresponde conocer del asunto de que se trata.

24. Dicho juicio está concluido y archivado, como se advierte del auto de uno de agosto de dos mil veintitrés, dictado en el propio expediente.

22

25. Juicio de nulidad. Una persona física promovió juicio de nulidad en contra de: a) la resolución contenida en el oficio de veintinueve de junio de dos mil veintiuno, a través de la cual, la Directora de Coordinación y Apoyo al Servicio de Carrera de la Dirección General Adjunta de Relaciones Laborales y Apoyo Jurídico, de la Dirección General de Recursos Humanos y Organización de la Fiscalía General de la República, le informó que del Sistema AS-400 de la Dirección General de Recursos Humanos y Organización, se advertía que había causado baja por separación del servicio de carrera, con efectos a partir del veinticuatro de septiembre de dos mil nueve, por lo que existía imposibilidad para atender su petición; y b) la resolución de veintiséis de agosto de ese mismo año, en la que el Consejo de Profesionalización de la entonces Procuraduría General de la República, decretó su separación del servicio de carrera.

26. Sentencia de nulidad. Tocó conocer del asunto a la Tercera Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la que lo admitió a trámite y seguido el procedimiento de ley, dictó resolución el veintiocho de octubre dos mil veintidós, sobreseyendo en el juicio, al estimar que carecía de competencia para conocer del asunto, al haberse impugnado resoluciones emitidas por la Fiscalía General de la República, la que tenía el carácter de órgano constitucional autónomo, por lo que no formaba parte de la Administración Pública Federal.

*“(foja 10 de la sentencia)
(...)”*

En principio, cabe resaltar que la consideración total en que se sustentó la Sala responsable, a fin de concluir que no se actualizaba la competencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa para conocer de las resoluciones impugnadas en el juicio de nulidad, se sustentó en el hecho de que la aludida Fiscalía es un órgano constitucionalmente autónomo que no forma parte de la Administración Pública Federal, sin que se dispusiera que el referido tribunal pudiera revisar alguno de sus actos; máxime que al tenor de lo dispuesto en el artículo 73, fracción XXIX-H, de la Constitución Federal, dicho tribunal solo puede conocer de controversias que se susciten entre la administración pública federal y los particulares.

24



CONTRADICCION DE CRITERIOS 2/2024

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

tradicionales del poder, con la finalidad de hacer más eficaz el desarrollo de las actividades encomendadas al estado.

Así, el alto tribunal fue enfático al señalar que el hecho de que dichos organismos guarden autonomía e independencia de los poderes primarios no significa que no formen parte del Estado Mexicano; máxime que su misión principal es atender necesidades torales, tanto del Estado como de la sociedad en general.

Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 20/2007, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXV, Mayo de 2007, página 1647. Registro: 172456, de rubro y texto siguientes:

‘ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS. NOTAS
DISTINTIVAS Y CARACTERÍSTICAS. (Se transcribe)
(...)’

También sirve de sustento la jurisprudencia P./J. 12/2008, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVII, Febrero de 2008, página 1871, de rubro y texto siguiente:

‘ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS. SUS
CARACTERÍSTICAS. (Se transcribe)
(...)’

Bajo ese contexto tenemos que, en efecto, la Fiscalía General de la República, por disposición expresa del artículo 102 constitucional, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de enero de dos mil dieciséis⁷, constituye un órgano público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio.

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10, fracción II de la Ley de la Fiscalía General de la República⁸,

⁷ “Artículo 102.

A. El Ministerio Público de la Federación se organizará en una Fiscalía General de la República como órgano público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio.
(...)"

⁸ “Artículo 10. Corresponde a la Fiscalía General:

$$(\dots)$$

II. Formar parte del Sistema Nacional de Seguridad Pública como entidad autónoma;

(...)"

Al respecto, cabe señalar que el Alto Tribunal también se ha pronunciado en el sentido de que, en términos de lo dispuesto en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución General de la República, la relación existente entre los elementos de los cuerpos de seguridad pública y el Estado no es de naturaleza laboral, sino administrativa, y que compete, por afinidad, al Tribunal Fiscal de la Federación (actualmente Tribunal Federal de Justicia Administrativa) conocer de los conflictos derivados de la prestación de servicios de los, entonces, agentes de la Policía Judicial Federal adscritos a la Procuraduría General de la República, a través del juicio de nulidad, independientemente del origen de la controversia, es decir, ya sea con motivo de las prestaciones que les asisten en razón de ese vínculo o por cuestiones de responsabilidad administrativa.

‘COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS ASUNTOS DERIVADOS DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOS AGENTES DE LA POLICÍA JUDICIAL FEDERAL. CORRESPONDE, POR AFINIDAD, AL TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACIÓN. (Se transcribe (...))’

26



CONTRADICCION DE CRITERIOS 2/2024

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

Ahora bien, no pasa inadvertido para este tribunal, el criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la **contradicción de tesis 27/2006-SS**, que en la parte que al caso interesa, es del tenor siguiente: (se transcribe)

Como puede advertirse, el Alto Tribunal fue claro al señalar que la competencia de los tribunales de jurisdicción contenciosa administrativa a que alude el artículo 73, fracción XXIX-H, de la Constitución Federal, se acota a dirimir los conflictos suscitados entre las unidades u órganos administrativos que componen a la administración pública federal y los particulares, **sin incluir a otros Poderes de la Unión, incluso, a los organismos autónomos.**

No obstante, debe resaltarse que dicho criterio se dirigió a dilucidar la competencia del entonces Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa para conocer del juicio de nulidad promovido contra la resolución del Órgano Interno de Control de la Cámara de Diputados, relativa a la imposición de sanciones administrativas a sus servidores públicos, dando origen al criterio jurisprudencial 2a./J. 49/2006, invocado por la Sala del conocimiento, que a continuación se reproduce:

**‘TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. CARECE DE COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE NULIDAD PROMOVIDO CONTRA LA RESOLUCIÓN DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS QUE IMPONE SANCIONES ADMINISTRATIVAS A SUS SERVIDORES PÚBLICOS. (Se transcribe)
(...)**

Como puede advertirse, la referencia del Alto Tribunal a los organismos autónomos, se vinculó a las controversias suscitadas entre los particulares y los otros poderes de la unión (legislativo y judicial), en atención a lo dispuesto en el artículo 11, fracción XII, de la entonces Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que establecía lo siguiente:

*‘Artículo 11. El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas que se indican a continuación:
(...)*

No obstante, cabe señalar que actualmente, el artículo 3, fracción XVI, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de julio de dos mil dieciséis⁹, amplió la garantía a la tutela jurisdiccional, prevista en el artículo 17 constitucional, en el sentido de que dicho órgano jurisdiccional conocerá también de los juicios de nulidad promovidos contra las resoluciones definitivas que impongan sanciones administrativas a los servidores públicos en términos de la legislación aplicable, así como contra las resoluciones que decidan los recursos administrativos previstos en dichos ordenamientos, dictadas por los órganos constitucionales autónomos.

Por lo anterior, **no existe razón para considerar** que con base en la contradicción de tesis 27/2006-SS y el criterio jurisprudencial señalado, existe algún impedimento para que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa pueda conocer del asunto que se analiza; máxime que, como se dijo, el Alto Tribunal estableció que **la relación existente entre los elementos de los cuerpos de seguridad pública y el Estado es de naturaleza administrativa** y que la competencia para conocer de los asuntos derivados de la prestación de servicios de dichos elementos corresponde, por afinidad, al referido tribunal, sin que la naturaleza jurídica de la Fiscalía General de la República como órgano público autónomo, constituya un impedimento al respecto, pues el hecho de que guarde autonomía e independencia de los poderes primarios no significa que no forme parte del Estado mexicano.

Además, en acatamiento al segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prevé el derecho de toda persona a que se le administre justicia, por ser ese órgano jurisdiccional, de acuerdo con las facultades de que está investido, el más afín para conocer de la demanda relativa, al ser un miembro de los cuerpos de

(...)

(...)"



seguridad pública quien efectúa el reclamo, es que le corresponde conocer del asunto de que se trata.

(...).” [lo destacado es de origen]

28. El tribunal colegiado ordenó en auto de diecisiete de agosto de dos mil veintitrés, el archivo del asunto, por estar totalmente concluido.

D. Criterio emitido por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el juicio de amparo directo 229/2023.

29. Juicio de nulidad. Una persona física promovió juicio de nulidad en contra del oficio de fecha veintisiete de junio de dos mil veintidós, a través del cual, la Subdirectora de Relaciones Laborales y Apoyo Jurídico de la Dirección General Adjunta de Relaciones Laborales de la Dirección General de Recursos Humanos y Organización de la Fiscalía General de la República, le expidió su Hoja Única de Servicios, y del contenido de esta documental; del que tocó conocer a la Sexta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, cuyo presidente, mediante resolución de veintitrés de agosto de dos mil veintidós, desechó la demanda por notoriamente improcedente, al estimar que ese Tribunal carecía de competencia para conocer del asunto, en virtud de que la Fiscalía General de la República, era un órgano constitucional autónomo, por lo que no formaba parte de la Administración Pública Federal.



CONTRADICCION DE CRITERIOS 2/2024

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

Primer Circuito, el que lo radicó con el número de expediente **229/2023**; y seguido el trámite correspondiente, lo resolvió en sesión de seis de julio de dos mil veintitrés, por mayoría de votos¹⁰, negando el amparo y protección de la Justicia Federal, con sustento en las consideraciones siguientes:

“(foja 9 de la sentencia)”

(...)

19. SEXTO. Estudio de fondo. De lo anterior se tiene que la Sala responsable determinó que el oficio impugnado *********, a través del cual la autoridad demandada, proporcionó al actor la Hoja Única de Servicios, no constituye una resolución definitiva en términos del artículo 3 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, ya que no es el producto final o la voluntad definitiva de la Administración Pública, pues no es un acto que ponga fin a un procedimiento, tampoco un acto aislado que le cause agravio, ni refleja la última voluntad de la autoridad que lo emitió, en tanto que únicamente se atendió la petición del actor al proporcionarle el documento solicitado.

20. También, la Sala puntualizó, que la pretensión del actor para que modificara la Hoja Única de Servicios, para tomar en cuenta la totalidad de percepciones durante el tiempo que laboró, versa sobre un asunto de carácter laboral, pues la emisora actuó en su calidad de patrón y no de autoridad, existiendo una instancia para su impugnación, pues no tiene naturaleza de acto de autoridad para efectos del juicio de nulidad, además no está contravirtiendo el cálculo o incremento de alguna pensión otorgada por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

¹⁰ El Magistrado Jean Claude Tron Petit, formuló voto particular, al considerar que los actos impugnados en el juicio de nulidad, se controvertieron por no haberse contemplado en la Hoja Única de Servicios, el salario total de las percepciones en activo; por lo que en su consideración, “(...) el trasfondo de la litis es una cuestión laboral relacionada con un servidor público sujeto a una relación de sujeción especial entre el quejoso y la Fiscalía General de la República, de modo que el tema gravita sobre ese tópico, y no sobre una función específica de imperio de las que tiene signada la institución (...)”; por lo que estimó que sería razonable que fuera el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el órgano encargado de dirimir la controversia, atento al contexto y peculiaridades de las relaciones existentes, la pretensión deducida y sus consecuencias.

22. *Precisado lo anterior, conviene tener en cuenta que por reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce, el artículo 102 de la Constitución Federal, establece que el Ministerio Público de la Federación se organizará en una Fiscalía General de la República como órgano público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio.*

23. Asimismo, cabe señalar que en la Ley de la Fiscalía General de la República publicada el veinte de mayo de dos mil veintiuno, en el artículo 2, establece que dicha Fiscalía es un organismo autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, tal como se advierte de dicho numeral que se transcribe a continuación:

24. En el mismo orden de ideas, la Fiscalía General de la República reúne las características propias de los órganos constitucionales autónomos precisados jurisprudencialmente por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya que: a) se encuentra configurado directamente en el artículo 102, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que le dota el carácter de ‘organismo público autónomo’; b) mantiene relaciones de coordinación con los otros órganos del Estado, porque no está subordinado a los Poderes Ejecutivo, Legislativo o Judicial en el ámbito competencial que desarrolla, al tener autonomía en su funcionamiento e independencia funcional y financiera, al estar dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios; y, d) atiende funciones primarias, originarias y torales del Estado, que requieren ser atendidas en beneficio de la sociedad, puesto que la Constitución Federal le encomienda,



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

entre otras, la atribución de persecución ante los tribunales, de todos los delitos del orden federal.

25. Resulta ilustrativo y aplicable las jurisprudencias 20/2007¹¹ y 12/2008¹², sustentadas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto:

**‘ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS. NOTAS
DISTINTIVAS Y CARACTERÍSTICAS. (Se transcribe)
(...)**

‘ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS. SUS CARACTERÍSTICAS. (Se transcribe) (...)’

26. A mayor abundamiento, los artículos 1 y 2 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, establecen la integración de la Administración Pública Federal, de los que se advierte que la Fiscalía General de la República no figura como parte de ella, como se aprecia a continuación:

‘ARTÍCULO 1. La presente Ley establece las bases de organización de la Administración Pública Federal, centralizada y paraestatal.

La Presidencia de la República, las Secretarías de Estado, los Departamentos Administrativos y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, integran la Administración Pública Centralizada.

Los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal, las instituciones nacionales de crédito, las organizaciones auxiliares nacionales de crédito, las instituciones nacionales de seguros y de fianzas y los fideicomisos, componen la administración pública paraestatal.

ARTÍCULO 2. En el ejercicio de sus atribuciones y para el despacho de los negocios del orden administrativo encomendados al Poder Ejecutivo de la Unión, habrá las siguientes dependencias de la Administración Pública Centralizada:

1. *Secretarías de Estado;*
2. *Departamentos Administrativos, y*
3. *Consejería Jurídica.'*

¹¹ Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXV, página 1647. Mayo de 2007. Novena Época.

¹² Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVII, página 1871. Febrero de 2008. Novena Época.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

XXIX-H. Para expedir la ley que instituya el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, dotado de plena autonomía para dictar sus fallos, y que establezca su organización, su funcionamiento y los recursos para impugnar sus resoluciones.

Asimismo, será el órgano competente para imponer las sanciones a los servidores públicos por las responsabilidades administrativas que la ley determine como graves y a los particulares que participen en actos vinculados con dichas responsabilidades, así como fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Federal o al patrimonio de los entes públicos federales.

La Sala Superior del Tribunal se compondrá de dieciséis Magistrados y actuará en Pleno o en Secciones, de las cuales a una corresponderá la resolución de los procedimientos a que se refiere el párrafo tercero de la presente fracción.

Los Magistrados de Sala Regional serán designados por el Presidente de la República y ratificados por mayoría de los miembros presentes del Senado de la República o, en sus recesos, por la Comisión Permanente. Durarán en su encargo diez años pudiendo ser considerados para nuevos nombramientos.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

Los Magistrados sólo podrán ser removidos de sus cargos por las causas graves que señale la ley’.

LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA

'(...)

Capítulo II

De la competencia del Tribunal y los Conflictos de Intereses

Artículo 3. (se transcribe)'

LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

‘ARTÍCULO 2o.- (se transcribe)’

28. El artículo 73, fracción XXIX-H Constitucional establece la fuente que da origen al Tribunal Federal de Justicia Administrativa y dispone como su función principal dirimir controversias que se susciten entre los particulares y los miembros de la Administración Pública Federal, así como su conformación, organización y funcionamiento, lo que evidencia que no puede incluirse a otros poderes (Legislativo y Judicial) **ni a los organismos constitucionales autónomos.**

29. De lo anterior se advierte, que la competencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa será únicamente para dirimir las controversias que se susciten entre la Administración Pública Federal y los particulares.

30. En consecuencia, de las transcripciones anteriores, se aprecia una restricción competencial establecida expresamente en el artículo 73, fracción XXIX-H, de la Constitución Federal, conforme a la cual, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa carece de atribuciones para conocer de actos emitidos por la Fiscalía General de la República, pues solo prevé que dicho tribunal sólo conocerá de actos emitidos por las autoridades de la Administración Pública Federal.

31. En apoyo a lo anterior, se cita por analogía y en lo conducente la jurisprudencia 49/2006¹³, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice:

‘TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. CARECE DE COMPETENCIA PARA

¹³ Visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, abril de 2006. Página 285. Novena Época.

32. Criterio jurisprudencial que establece que en términos del artículo 73, fracción XXIX-H, constitucional, la competencia de los tribunales de jurisdicción contencioso administrativa se acota a dirimir los conflictos suscitados entre la Administración Pública Federal y los particulares, sin incluir a otros Poderes de la Unión (Legislativo y Judicial) ni a los órganos constitucionales autónomos.

33. Consecuentemente, si el acto impugnado en el juicio de nulidad fue emitido por la Fiscalía General de la República, es un organismo autónomo, que no pertenece a la Administración Pública Federal, en razón de lo cual, sus actos no pueden ser juzgados por un tribunal que no tiene competencia para analizarlos.

34. Sin que obste a lo anterior, el hecho de que el quejoso refiera que los asuntos de la Fiscalía General de la República sí son ventilados a través del juicio contencioso administrativo en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, pues únicamente es competente por afinidad para dirimir conflictos derivados de las prestaciones otorgadas a un Ministerio Público de la Federación, conforme al artículo 123, Apartado B, fracción XIII y 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, por tratarse de una relación administrativa entre la autoridad demandada y un elemento perteneciente a la Fiscalía General de la República.

35. Lo anterior, porque dichos preceptos legales hacen referencia a los casos en los que la separación remoción, baja, cese, destitución o cualquier otra forma de terminación del servicio fue injustificada, en los que la demandada sólo estará obligada a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tengan derecho, sin que en ningún caso proceda la reincorporación al servicio; tal como se advierte de su transcripción:

'ARTÍCULO 123. (Se transcribe)'

‘ARTÍCULO 50 (Se transcribe)’.

36. Tampoco es óbice, que el artículo 3, fracción XVI, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa,



CONTRADICCION DE CRITERIOS 2/2024

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

establezca dentro de las hipótesis que el citado tribunal conoce, que: ‘Las resoluciones definitivas por las que se impongan sanciones administrativas a los servidores públicos en términos de la legislación aplicable, así como contra las que decidan los recursos administrativos previstos en dichos ordenamientos, además de los órganos constitucionales autónomos’.

37. Lo anterior es así, porque dichas normas no pueden prevalecer contra el artículo 73, fracción XXIX-H, constitucional, que impide considerar procedente la vía del juicio contencioso administrativo para combatir las resoluciones emitidas por un organismo constitucional autónomo, en el caso, la Fiscalía General de la República, habida cuenta que atendiendo a los principios de supremacía constitucional y de interpretación conforme, debe aplicarse siempre la norma que sea compatible con la Carta Magna; de ahí lo inoperante de sus planteamientos.

(...)

42. *En atención a que resultaron inoperantes e ineficaces los conceptos de violación propuestos, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal. (...)” [lo destacado es de origen]*

- 32.** La parte quejosa interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia de mérito, el que se radicó con el número **5715/2023** del índice de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y se desechó mediante acuerdo de presidencia de seis de septiembre de dos mil veintitrés, al no haberse planteado algún agravio que demostrara la inconstitucionalidad y/o inconvencionalidad de una norma de carácter general, ni la interpretación de un precepto constitucional o tratado internacional, sino que por el contrario, sólo se hicieron valer cuestiones de legalidad.



CONTRADICCION DE CRITERIOS 2/2024

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

sesión de veinticuatro de enero de dos mil veinticuatro¹⁴, por unanimidad de votos, negando el amparo y protección de la Justicia de la Unión, por las razones siguientes:

“(foja 8 de la sentencia)”

$$\left(\begin{array}{c} \vdots \\ \vdots \\ \vdots \end{array} \right)$$

12. SEXTO. Estudio. La quejosa aduce en el primer concepto de violación que el encargado de la Ponencia Dieciocho de la Primera Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas y Derecho a la Buena Administración del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México carece de competencia y jurisdicción para resolver el asunto, pues debió ser resuelto por una Sala Ordinaria de conformidad con el artículo 31, fracción I, de la Ley Orgánica del citado Tribunal.

13. Para dar respuesta a los argumentos expuestos por la quejosa, conviene transcribir el contenido de los artículos 25 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, así como el diverso 163 de la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, que disponen:

LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

'ARTÍCULO 25. (se transcribe)'

LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

'ARTÍCULO 163. (se transcribe)'

14. De los preceptos transcritos, se advierte que ambas legislaciones prevén la posibilidad de que las Salas Especializadas en Materia de Responsabilidades Administrativas pueden conocer de los asuntos que sean competencia de las Salas Ordinarias Jurisdiccionales, previo acuerdo de la Junta de Gobierno y Administración del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, en atención a las cargas de trabajo.

¹⁴ Con posterioridad a la admisión de la presente contradicción de criterios, por parte del entonces Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México.

15. Por otra parte, constituye para este Tribunal Colegiado un hecho notorio que mediante Acuerdo A/JGA/353/2019 de la Junta de Gobierno y Administración del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, expedido en sesión extraordinaria de veintisiete de mayo de dos mil diecinueve, se otorgó competencia a las Salas Especializadas en Materia de Responsabilidades Administrativas y Derecho a la Buena Administración para conocer de los asuntos competencia de las Salas Ordinarias.

16. Lo anterior es así, toda vez que aunque la Sala en la sentencia impugnada no citó dicho Acuerdo en el considerando de competencia, lo cierto es que en el propio portal de transparencia del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México¹⁵, se desprende una diversa sentencia en la que la Sala responsable fundó su competencia en el citado Acuerdo A/JGA/353/2019 para conocer de un asunto sobre pago de derechos por suministro de agua.

17. En consecuencia, el primer concepto de violación resulta infundado.

18. En el segundo concepto de violación la quejosa manifiesta que el sobreseimiento decretado por considerar la inexistencia de un crédito fiscal, es inconstitucional e incorrecto por estimar que para acreditar su existencia debió exhibir las boletas de cobro correspondientes, expedidas por el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, considerando la Sala que el cobro deviene de un formato múltiple de pago a la Tesorería, no así de las boletas expedidas por dicho organismo, pasando por alto que en el juicio exhibió documentales para acreditar el crédito fiscal, consistente en el formato múltiple de pago, por lo que la responsable debió estudiar el fondo.

19. Cabe señalar que la Sala sobreseyó en el juicio al determinar que la consulta electrónica realizada por la actora en el sistema digital de la autoridad demandada no constituía un acto fiscal que causara agravio al particular, pues en dicha consulta no se determinó crédito alguno, ni tampoco constituye una resolución definitiva, ya que solo contiene cantidades no enteradas, con el fin de que el contribuyente regularice o no su situación si así lo desea.

15

https://www.tjacdmx.gob.mx/images/Transparencia_UT/Articulo_121/Fraccion_XXXIX/Dan20/TJI-5318-2019_VP_DM.pdf



CONTRADICCION DE CRITERIOS 2/2024

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

20. Lo anterior, porque conforme al artículo 174, fracción I, del Código Fiscal de la Ciudad de México la autoridad propone los montos por pago de derechos por el suministro de agua, y de acuerdo con el diverso 172, están obligados al pago los usuarios a través de las respectivas boletas que para tal efecto se emitan y que la falta de recepción de las mismas no excluye al contribuyente de pagar, pues en caso de no recibirlas debe acudir ante la autoridad para obtener el documento que las sustituye y conocer sus adeudos y cubrirlos.

21. En tal sentido, contrario a lo alegado por la quejosa, el sobreseimiento decretado en el juicio recayó sobre la consulta electrónica realizada por la quejosa en el sistema digital de la autoridad demandada, la cual se consideró no constituye la determinación de crédito alguno, ni tampoco una resolución definitiva, pues solo es una propuesta de pago.

22. En consecuencia, al partir la quejosa de una premisa incorrecta, se califica infundado el segundo concepto de violación.
(...)”.

36. El tribunal colegiado ordenó el archivo del asunto en auto de doce de junio de dos mil veinticuatro.

F. Criterio emitido por el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el juicio de amparo directo 807/2022.

37. Juicio de nulidad. Una persona física promovió juicio de nulidad en contra de la resolución administrativa emitida por el Director de Mandamientos Ministeriales y Judiciales de la Policía Federal Ministerial, en la que ordenó la supresión de su plaza por razones presupuestales, como Policía Federal

38. Sentencia de nulidad. Tocó conocer del asunto a la Décimo Cuarta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la que lo admitió a trámite y seguido el procedimiento de ley, lo resolvió el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, sobreseyendo en el juicio, al considerar fundada la causal de improcedencia prevista en el artículo 8º, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en virtud de que de conformidad con el artículo 73, fracción XXIX-H, párrafos primero y segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, únicamente tenía competencia para resolver los conflictos y controversias que se suscitaran entre los particulares y la Administración Pública Federal, pero no para conocer de las resoluciones emitidas por organismos constitucionales autónomos, como lo era la Fiscalía General de la República.

42



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

protección constitucional solicitada, con base en las consideraciones siguientes:

“(foja 15)
(...) ”

45. Los conceptos de violación planteados por la parte quejosa son fundados.

46. De la sentencia señalada como acto reclamado se desprende que la Décimo Cuarta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, sobreseyó el juicio de nulidad al declararse incompetente para conocer del acto impugnado en virtud de que la misma fue emitida por la **Fiscalía General de la República** quien por potestad constitucional, es un **órgano autónomo**, por tanto, su actuar no se puede supeditar al escrutinio del Tribunal Federal de Justicia Administrativa ya que no forma parte de la administración Pública Federal.

47. Al respecto, el artículo 123, Apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone: (Se transcribe)
(...)

48. Por su parte, el artículo 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, dispone lo siguiente:

ARTÍCULO 50.- Las sentencias del Tribunal se fundarán en derecho y resolverán sobre la pretensión del actor que se deduzca de su demanda, en relación con una resolución impugnada, teniendo la facultad de invocar hechos notorios.

Cuando se hagan valer diversas causales de ilegalidad, la sentencia de la Sala deberá examinar primero aquéllos que puedan llevar a declarar la nulidad lisa y llana. En el caso de que la sentencia declare la nulidad de una resolución por la omisión de los requisitos formales exigidos por las leyes, o por vicios de procedimiento, la misma deberá señalar en que forma afectaron las defensas del particular y trascendieron al sentido de la resolución.

Las Salas podrán corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos que se consideren violados y examinar en su conjunto los agravios y causales de ilegalidad, así como

Tratándose de las sentencias que resuelvan sobre la legalidad de la resolución dictada en un recurso administrativo, si se cuenta con elementos suficientes para ello, el Tribunal se pronunciará sobre la legalidad de la resolución recurrida, en la parte que no satisfizo el interés jurídico del demandante. No se podrán anular o modificar los actos de las autoridades administrativas no impugnados de manera expresa en la demanda.

Hecha excepción de lo dispuesto en fracción XIII, apartado B, del artículo 123 Constitucional, respecto de los Agentes del Ministerio Público, los Peritos y los Miembros de las Instituciones Policiales de la Federación, que hubiesen promovido el juicio o medio de defensa en el que la autoridad jurisdiccional resuelva que la separación, remoción, baja, cese, destitución o cualquier otra forma de terminación del servicio fue injustificada; casos en los que la autoridad demandada sólo estará obligada a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tengan derecho, sin que en ningún caso proceda la reincorporación al servicio.

‘Artículo 61. Las relaciones jurídicas entre la Fiscalía General y su personal terminarán por las causas siguientes:

II. Incapacidad permanente para el desempeño de sus funciones dictaminada por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado;

IV. Inhabilitación:

V. Remoción:



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

VI. Consecuencia del procedimiento correspondiente:

VII. Por mandamiento judicial que tenga efecto equivalente a lo previsto en las fracciones anteriores;

VIII. Muerte;

IX. Jubilación o retiro, y

X. Cualquier otra causa prevista en las disposiciones legales aplicables.

Artículo 62. Si la separación, remoción, destitución, inhabilitación, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio profesional de carrera fuera declarada mediante sentencia definitiva como injustificada, la Fiscalía General sólo estará obligada a pagar la indemnización y demás prestaciones a que se refiere esta Ley y las disposiciones aplicables, sin que en ningún caso proceda su reincorporación.

La indemnización a que se refiere el párrafo anterior consistirá en:

I. Veinte días de salario base por cada uno de los años de servicios prestados, y

II. Tres meses de salario integral.'

50. De los artículos transcritos, se desprende que:

a) El **personal de la Fiscalía General de la República**, podrá impugnar la resolución relativa a la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio ante autoridad jurisdiccional.

b) Por tanto, que el Tribunal jurisdiccional (Tribunal Federal de Justicia Administrativa), tiene competencia para conocer y resolver sobre las controversias derivadas de la prestación del servicio profesional de carrera **ministerial, policial y pericial**, esto es, de las resoluciones por las cuales se dé la **separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio** sobre servidores públicos a que se refiere el **artículo 123, apartado B, fracción XIII**, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

c) Que **si la autoridad jurisdiccional** resolviera que la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio **fue injustificada**, el Estado sólo

51. Además de lo anterior, los citados preceptos legales no han sido derogados ni modificados, por tanto, siguen teniendo vigencia para concluir que es competente del tribunal administrativo conocer sobre las controversias que se susciten entre la Fiscalía General de la República con sus trabajadores.

‘POLICIAS MUNICIPALES Y JUDICIALES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO Y DE SUS MUNICIPIOS. SU RELACION JURIDICA ES DE NATURALEZA ADMINISTRATIVA. (Se transcribe (...))’

**SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO. DE
LOS CONFLICTOS SUSCITADOS CON MOTIVO DE LA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SUS AGENTES
CORRESPONDE CONOCER, POR AFINIDAD, AL
TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO. (Se transcribe)
(...)**

**COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS CONFLICTOS
PLANTEADOS EN CONTRA DE LA SECRETARÍA DE
SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL, POR**



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

UN POLICÍA, CON MOTIVO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS. CORRESPONDE, POR AFINIDAD, AL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL. (Se transcribe)
(...)

55. Ahora, es verdad que el artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reconoce a la **Fiscalía General de la República** como un órgano autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios.

56. Sin embargo, la autonomía se dotó para efecto de la **investigación de delitos** y no en cuanto a la relación de la Fiscalía con sus trabajadores.

57. Ello se puede corroborar de la exposición de motivos a la reforma del artículo 102 constitucional, donde, en esencia, se desprende lo siguiente:

‘(...)

La realidad es que nuestro Estado ha sido incapaz de garantizar **la investigación y persecución de los delitos**, que es condición necesaria para alcanzar el debido castigo de los responsables. Nuestro andamiaje constitucional deposita esta importante tarea en el Ministerio Público y le otorga amplias facultades en la materia.

Desafortunadamente, esta institución se encuentra rebasada por las circunstancias actuales. En el Ministerio Público normalmente priva la ineficiencia, el rezago en la atención de los asuntos y la discrecionalidad. No es exagerado afirmar que actualmente es visto por una parte importante de la población como una figura que atropella, extorsiona y es parcial en su actuación. Lo que es alarmante si consideramos que el Ministerio Público tiene la función de representar a la sociedad y defender sus intereses.

En gran medida, esta situación se debe a su dependencia del Poder Ejecutivo, que impide su profesionalización y lo sujeta a intereses ajenos a su tarea fundamental.

En este contexto, consideramos necesario impulsar una reforma profunda del Ministerio Público que lo haga compatible con las exigencias y objetivos de un moderno Estado democrático de Derecho. De forma concreta proponemos reformar el artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a fin de dotarlo de autonomía técnica y de gestión, personalidad y patrimonio propios.

58. De la exposición de motivos, se puede advertir que la intención del legislador fue dotar de **autonomía** propia a la Institución del Ministerio Público (que tiene la función de representar a la sociedad y defender sus intereses), a fin de



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

garantizar la investigación y persecución de los delitos para alcanzar el debido castigo de los responsables, sin que se vea mermado por intereses ajenos al estar subordinado a otra institución del Estado.

59. Ello derivó en que, esa institución era ineficiente, estaba en rezago en la atención de los asuntos y la discrecionalidad en la persecución de los delitos; además de que, era vista por una parte importante de la población como una figura que atropellaba, extorsionaba y era parcial en su actuación.

60. Y además, que esa ineficiencia, rezago y discrecionalidad, se estimó que **se debía a su dependencia del Poder Ejecutivo, lo que impedía su profesionalización y lo sujetaba a intereses ajenos a su tarea fundamental.**

61. De ahí que, se consideró oportuno y necesario impulsar la reforma al artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de dotar de autonomía técnica y de gestión, personalidad y patrimonio propios a la Institución del Ministerio Público, para lograr que sea compatible con las exigencias y objetivos de un moderno Estado democrático de Derecho.

62. En conclusión, la autonomía otorgada a la Institución del Ministerio Público, fue para garantizar **la investigación y persecución de los delitos para alcanzar el debido castigo de los responsables**, eliminando su dependencia del Poder Ejecutivo, que impedía su profesionalización y lo sujetaba a intereses ajenos a su tarea fundamental.

63. Sin embargo, esa autonomía no consistió en que su actuación no estuviera sujeta al escrutinio del Poder Judicial, principalmente, en su relación con su personal administrativo; ni tampoco que tenga su propio sistema de justicia para resolver las controversias que se susciten entre la Propia Institución con sus trabajadores.

64. Ello, principalmente porque subsisten los artículos que reconocen y garantizan la protección y derecho de las personas que presten sus servicios a dicha institución, tales como el **artículo 123, apartado B, fracción XIII**, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

65. Así como los diversos 61 y 62 de la Ley de la Fiscalía General de la República; y artículo 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, mismos que fueron analizados en párrafos precedentes.

70. Ello, en virtud de que, actualmente, se debe agotar el principio de definitividad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con fundamento en los artículos citados con anterioridad, a saber, artículo 123, Apartado B, fracción XIII.

43. Juicio de amparo directo. En contra de dicha resolución se promovió juicio de amparo directo, del que conoció el Decimoctavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, el que lo radicó con el número de expediente **581/2022**; y seguido el trámite correspondiente, lo resolvió en sesión de dos de junio de dos mil veintitrés, por unanimidad de votos, concediendo el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en atención a la causa de pedir, con sustento en las consideraciones siguientes:

$$\left(\begin{array}{c} \vdots \\ \vdots \\ \vdots \end{array} \right)$$

52



CONTRADICCION DE CRITERIOS 2/2024

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

constitucional que solicita de acuerdo a las consideraciones que se expondrán a continuación y atendiendo a la causa de pedir.

$$(\dots)$$

Por tal motivo, contrario a lo que sostiene la quejosa, este órgano jurisdiccional no considera viable acceder al ejercicio de un control de convencionalidad, si como se verá más adelante, las disposiciones normativas internas resuelven la cuestión debatida a través del presente medio de control de la constitucionalidad.

Ahora, atendiendo a la causa de pedir de la quejosa, sin necesidad de acudir a la suplencia en la deficiencia de la queja a su favor –como lo solicita en la parte final de su concepto de violación-, se advierte que de forma medular se duele que la Sala responsable haya sobreseído en el juicio contencioso administrativo de origen por estimarlo improcedente en contra de acto emitido por la Fiscalía General de la República, como órgano constitucionalmente autónomo.

En ese sentido, este órgano jurisdiccional advierte que el motivo fundamental por el cual los Magistrados integrantes de la Tercera Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa decidieron sobreseer en el juicio contencioso administrativo de origen, fue por haber estimado que la resolución impugnada y contenida en el oficio ***** , a través de la cual, el Titular del Departamento de Recursos Materiales, en suplencia por ausencia del Subdelegado Administrativo de la Delegación Estatal en Quintana Roo, de la Fiscalía General de la República, **determinó una liquidación** en cantidad total de \$***** , **(derivada de la conclusión de la relación laboral de la ahora quejosa con esa Fiscalía)**, se emitió por un órgano constitucionalmente autónomo respecto de cuyos actos, estimaron improcedente el juicio contencioso administrativo federal, por no actualizarse el supuesto contenido en el artículo 73, fracción XXIX-H, de la Constitución Federal, que prevé la competencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, sólo respecto de controversias que se susciten entre la Administración Pública Federal y los particulares.

De acuerdo con ello, la Sala responsable consideró actualizada la causa de improcedencia derivada de lo establecido en el artículo 8, fracción II, en relación con el 9,

Al respecto, no debe desvincularse que la parte quejosa centra gran parte de sus argumentos en tratar de evidenciar a este órgano jurisdiccional que conforme a la anterior Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, el juicio contencioso administrativo federal resultaba procedente en contra de los actos de tal Procuraduría General, pero que en el caso, al centrarse la Sala responsable sobre la reforma a lo previsto en el artículo 102 de la Constitución Federal, le aplica una legislación que no le resulta aplicable, considerando la fecha en que ingresó a la mencionada Institución.

Precisado lo anterior, este Tribunal considera que tanto en el caso de la anterior legislación que regulaba a la otrora Procuraduría General de la República, como en el de la actual Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, el juicio contencioso administrativo resulta procedente, conforme a las consideraciones que enseguida se expondrán.

Así, acorde con lo que expone el quejoso y tomando en cuenta que el oficio impugnado ***** se emitió el veinte de diciembre de dos mil veintiuno, es notorio que se dictó bajo la vigencia de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República vigente, por lo cual, cobra relevancia precisar que con base en esa normatividad fue que la Sala responsable estimó improcedente el juicio contencioso administrativo federal y ello conducirá a definir los motivos por los cuales, en el caso particular, sí se estima procedente el juicio contencioso administrativo federal y es dable otorgar la protección constitucional que solicita la quejosa, puesto que la autoridad responsable parte de una concepción errónea del término '**Autonomía**'.

En efecto, el tratamiento teórico y aplicación práctica de dicho concepto en nuestro sistema constitucional, se caracteriza por un sinnúmero de confusiones, las cuales derivan en gran medida de los dogmas en los que normalmente se sustenta su explicación. Ello se afirma de ese modo, porque la autonomía de un órgano o de una entidad se confunde con la soberanía, con la independencia y con la no pertenencia a una estructura orgánica, además que en algunos casos extremos, se le asignan grados y niveles –‘autonomía plena’, ‘autonomía limitada’- entre otras ideas, con base en las cuales, se trata de entender este concepto abstracto y tan relevante para la ciencia



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

constitucional, como lo es del mismo modo el concepto de soberanía.

Así, en el sentido original y etimológico del término '**Autonomía**', se implica que el órgano autónomo expida sus propias normas. En tal sentido, ese término no es actualmente restringido, pero sí mantiene su sentido esencial, el cual consiste en la capacidad de un órgano o de un organismo para actuar y tomar determinaciones sin la interferencia, ni el condicionamiento de otro, independientemente de su jerarquía normativa, o de su fuerza real.

En ese sentido, la autonomía es un 'modo de hacer algo', o de actuar, cuya esencia no consiste en la independencia, ni en la separación, sino en la integración y en la pertenencia a una estructura o a un régimen de gobierno, pero sin que ello implique que un órgano pueda interferir en la actividad de otro.

Entonces, la medida de la autonomía es la competencia; esto es, el conjunto de facultades y atribuciones que un órgano o una entidad puede ejercer por disposición de las normas constitucionales y de las leyes. Así, la expresión clara y completa debe ser la de **‘órgano con competencia autónoma’** o, en su caso **‘entidad cuyos órganos ejercen competencias autónomas’**, porque lo que se ejerce, es la competencia y no la autonomía; y, porque, además, como se dijo previamente, la autonomía por sí misma es sólo un modo de hacer algo cuyo contenido que le otorga sustancia es la competencia.

En ese orden de ideas, este órgano jurisdiccional considera que las consideraciones en que sustentó su determinación la Sala responsable conducen a considerar la existencia de ‘autonomías parciales’ y ‘autonomías plenas’, ya que de aceptar correcta esa postura, sería tanto como concebir una autonomía para actuar pero basada en normas que son inaplicables por el órgano autónomo; por ello, lo decidido por la juzgadora redundaría en un contrasentido, ya que lo efectivamente real y existente, es una competencia más amplia o más restringida, lo cual dependerá del número y de la importancia de las atribuciones que pueda ejercer, de manera autónoma, un órgano o una institución.

De igual modo debe apuntarse, que la autonomía no equivale a soberanía, porque toda competencia tiene límites;

y, porque un órgano autónomo, o con competencia autónoma, sólo puede actuar cuando las normas jurídicas lo permiten. De igual modo, debe desestimarse la idea en el sentido que la autonomía equivale a la no pertenencia a una estructura, o a un órgano constituido, porque pueden existir instituciones o empresas públicas que forman parte de un órgano de gobierno y, que tienen competencia autónoma.

Tampoco es dable suponer, que la autonomía sólo existe cuando en las normas jurídicas se emplea ese término para referirse al estatus de un órgano o de un organismo; porque la nota distintiva de la autonomía únicamente radica en que los organismos o entidades autónomas ejerzan sus respectivas atribuciones, sin interferencia de otro u otros órganos.

En concordancia con lo razonado se considera necesario acotar que en México, se ha reservado la denominación de **‘organismos constitucionales autónomos’** para determinadas instituciones que se han creado gradualmente desde fechas un tanto recientes, a las cuales, se les ha asignado una competencia que antes correspondía a alguno de los órganos constituidos, o que no estaba prevista en las normas constitucionales; y, consecuentemente, ningún órgano podía ejercer. Como ejemplo de lo primero tenemos la materia electoral, en tanto que de lo segundo, lo es la protección de los derechos humanos.

Esos organismos, son instituciones que no pertenecen estructuralmente a un órgano constituido **desde el punto de vista formal**, circunstancia que se toma como base para denominarlos ‘autónomos’, conforme a la idea errónea del término autonomía que se concibe como no pertenencia, de acuerdo con la cual, ese concepto supone que como esa clase de órganos no forman parte de los órganos constituidos y, por ende, están separados de ellos, se consideran ‘autónomos’, ‘libres’ o plenamente ‘irresponsables’, condición que además, se llega a considerar les asignan las normas jurídicas expresamente, como sucede por ejemplo, con el contenido del artículo 102 constitucional (para el caso que nos concierne); incluso, dentro de esa falaz concepción de los órganos constitucionales autónomos, existen teorías que les otorgan el tratamiento de ‘nuevos órganos del estado’ o ‘poderes públicos’, de tal suerte que ahora junto a los tradicionales, existen otros como el Banco de México, el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Instituto Nacional Electoral, los



CONTRADICCION DE CRITERIOS 2/2024

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

organismos de acceso a la información y la Fiscalía General de la República.

No obstante, las Instituciones y organismos mencionados en la parte final del párrafo que precede, son Instituciones públicas a la que se asigna competencia de diversa naturaleza; la cual en la mayoría de los casos no corresponde a las funciones de gobierno en sentido amplio (administración y/o gobierno, legislación e impartición de justicia), como ocurre tratándose precisamente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, así como de las Comisiones Protectoras de los Derechos Humanos.

En otros casos, sí se trata del ejercicio de atribuciones de gobierno, pero en el ámbito competencial respectivo, **dado que el organismo autónomo no actúa como instancia decisoria definitiva**, ejemplo de lo cual, dentro del Sistema Jurídico Nacional se tiene al Banco de México, que es una Institución encargada de la política monetaria, pero en cuanto a sus aspectos técnicos, mas no a los de gobierno y administración en la materia, las cuales están obviamente, bajo la responsabilidad del **Presidente de la República**.

En esa misma línea, no debe perderse de vista que tratándose de la procuración de justicia, la confusión que llega a darse, se debe a que a la Fiscalía General de la República a pesar que se le ha concebido a partir del año dos mil dieciocho como 'autónoma'; de acuerdo con lo previsto en el artículo 102 de la Constitución Federal, por regla general su titular es propuesto por el Presidente Constitucional y aprobado por la Cámara de Senadores, sin que pase inadvertido que en algunos casos esta última podrá designarlo; lo cual no implica que su competencia esté fuera del ámbito de atribuciones del gobierno federal, **cuyo titular puede remover libremente a ese funcionario** de acuerdo con lo previsto en la fracción IV, del mismo numeral constitucional mencionado.

En suma, si la competencia no es de gobierno en sentido amplio, o los organismos autónomos federales o locales no la ejercen en tanto nivel definitivo decisorio, con la creación de los órganos constitucionales autónomos, no se crea un nuevo órgano constituido, aunque exista autonomía en el ejercicio de la institución respectiva.

‘89. Las facultades y obligaciones del Presidente, son las siguientes: --- (...) --- IX.- Intervenir en la designación del Fiscal General de la República y removerlo, en términos de lo dispuesto en el artículo 102, Apartado A, de esta Constitución; (...)’.

58



CONTRADICCION DE CRITERIOS 2/2024

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

establezca la ley. La remoción podrá ser objetada por el voto de la mayoría de los miembros presentes de la Cámara de Senadores dentro de un plazo de diez días hábiles, en cuyo caso el Fiscal General será restituido en el ejercicio de sus funciones. Si el Senado no se pronuncia al respecto, se entenderá que no existe objeción. (...)’.

Derivado de lo anterior se tiene que, si el titular del ejecutivo federal conforme lo previsto en el artículo 80 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es quien detenta el ejercicio del Supremo Poder Ejecutivo, cuenta con el ejercicio de facultades de gobierno y administración, para en su caso, poder remover al titular de la Fiscalía General de la República, así como para participar en su designación, con la aprobación de la Cámara de Senadores o en sus recesos por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión; ese titular del ejecutivo federal, es quien en todo caso, cuenta con la competencia de gobierno en sentido amplio respecto a la designación y remoción de quien encabeza la institución encargada de la procuración de justicia en el país, es decir, del titular de la Fiscalía General de la República y, por ello, es quien ejerce y directamente tiene la responsabilidad en esa materia en tanto nivel definitivo decisorio.

De ahí que no pase inadvertido que si la Administración Pública Federal está compuesta por los entes que integran el Poder Ejecutivo, esto es, todas las áreas creadas con la finalidad de auxiliar al Presidente de la República, por ser quien detenta el Supremo Poder Ejecutivo, entonces la competencia de los tribunales de jurisdicción contenciosa administrativa a que se refiere el artículo 73, fracción XXIX-H, de la Constitución Federal, se acota a dirimir los conflictos que se susciten entre las diversas áreas o departamentos del Poder Ejecutivo Federal y los particulares, sin incluir a los otros Poderes de la Unión, o bien, **a los organismos constitucionales autónomos**, como lo es la Fiscalía General de la República, al no formar directamente parte de la aludida Administración Pública Federal.

Efectivamente, si como se expuso previamente, aun cuando la aludida Fiscalía General no pertenezca estructuralmente a un órgano constituido **desde el punto de vista formal**, en su ámbito competencial respectivo, **no actúa como instancia decisoria definitiva**, por ser una Institución encargada de la representación social y de la procuración de justicia, pero en cuanto a sus aspectos técnicos, **mas no a los de gobierno**

Por ello, contrario a lo que manifiesta la recurrente, este órgano jurisdiccional considera que sí se surte la competencia material que se contiene el artículo 73, fracción XXIX-H, de la Constitución Federal, referente a dirimir los conflictos que se susciten entre las diversas áreas o departamentos del Poder Ejecutivo Federal y los particulares, que deriva de lo previsto en los artículos 3, fracción XIX, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en relación con el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la propia Constitución Federal.

Lo anterior se considera de ese modo, porque no debe perderse de vista que la accionante de nulidad impugnó la resolución contenida en el oficio ***** , a través de la cual, el Titular del Departamento de Recursos Materiales, en suplencia por ausencia del Subdelegado Administrativo de la Delegación Estatal en Quintana Roo, de la Fiscalía General de la República, determinó una liquidación en cantidad total de \$***** , (derivada de la conclusión de la relación laboral de la ahora quejosa con esa Fiscalía).

En ese orden de ideas, si la ahora quejosa contaba con el carácter de **Agente del Ministerio Público de la Federación** e impugnó la resolución mencionada en el párrafo que precede, a través de la cual se determinó la cuantificación de su liquidación, es notorio que se encontraba en una relación laboral-administrativa con la entonces Procuraduría General de la República (cuando ingresó), así como con la Fiscalía General de la República (cuando decidió separarse del cargo).

Con base en lo anterior, es preciso considerar que en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se establecen las bases que rigen el derecho del trabajo, en el cual se regulan las relaciones entre particulares referente a todo tipo de contrato laboral (apartado A), así como las que se dan entre el Estado y los servidores públicos (apartado B); a este último se le reconoce como derecho laboral burocrático.

El primero de ellos surge con motivo de un contrato celebrado entre particulares, mientras que el segundo de los sistemas enunciados se origina en virtud de un acto administrativo, mediante el cual se nombra al servidor



CONTRADICCION DE CRITERIOS 2/2024

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

público. En el primero, los procedimientos laborales se rigen por la Ley Federal del Trabajo; y, en el segundo, por las leyes burocráticas respectivas, aunque en algunos casos aquélla es supletoria de ésta.

A pesar de la existencia de estos dos sistemas, hay servidores públicos que, siendo parte del régimen constitucional previsto en el apartado B, se rigen por lo dispuesto en leyes especiales; tal es el caso de la quejosa, que se ubica en aquellos a los que se refiere la fracción XIII del apartado B del artículo 123 constitucional¹⁶.

Así, la relación entre el Estado y los servidores públicos que se rigen por leyes especiales, es decir, los Ministerios Públicos, los peritos y los miembros de las instituciones policiales de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, se regula a través de un régimen jurídico administrativo especializado; la razón de ello atiende a la naturaleza de las funciones específicas –de seguridad pública nacional– que realizan. Ello se basa en una jerarquía de poder, en que el órgano jerárquicamente superior impone mandatos sobre los órganos inferiores y la relación entre todos ellos es de carácter público, perteneciente al ramo administrativo, pues quien da las órdenes y quien las cumple, no debe perseguir un interés privado, sino el interés público.

En el caso de los Ministerios Públicos -como fue el caso del cargo que ocupaba la quejosa-, están sujetos a un régimen especial previsto por la fracción XIII, apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Tratándose de los ministerios públicos federales, se rigen por la Ley Orgánica de la ahora Fiscalía General de la República que le fue aplicada a la fecha de la baja de la ahora quejosa. Los apartados normativos de la legislación en comento que

16 “123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley. --- [...] --- B. Entre los Poderes de la Unión y sus trabajadores: --- [...] XIII. Los militares, marinos, personal del servicio exterior, agentes del Ministerio Público, peritos y los miembros de las instituciones policiales, se regirán por sus propias leyes. --- Los agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros de las instituciones policiales de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, podrán ser separados de sus cargos si no cumplen con los requisitos que las leyes vigentes en el momento del acto señalen para permanecer en dichas instituciones, o removidos por incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus funciones. Si la autoridad jurisdiccional resolviera que la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio fue injustificada, el Estado sólo estará obligado a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho, sin que en ningún caso proceda su reincorporación al servicio, cualquiera que sea el resultado del juicio o medio de defensa que se hubiere promovido. (...)”.

‘50. Las relaciones jurídicas entre la Fiscalía General y su personal se ramificarán de la forma siguiente: --- I. Servicio profesional de carrera de la rama sustantiva: Se integrará por personas agentes del Ministerio Público de la Federación, personas agentes de la Policía Federal Ministerial, personas peritas, personas analistas y personas facilitadoras, rigiéndose por lo dispuesto en la fracción XIII, del apartado B, del artículo 123 de la Constitución, en la presente Ley y en las demás disposiciones aplicables en los términos que fije el Estatuto orgánico; (...).’

‘53. El servicio profesional de carrera es el sistema integral de regulación del empleo público de toda persona que preste servicios en la Fiscalía General, y tiene por objeto estimular el crecimiento, desarrollo profesional y humano del personal; propiciar la estabilidad basada en el rendimiento y el cumplimiento legal de sus funciones; así como reforzar el compromiso ético, sentido de pertenencia e identidad institucional del personal. --- El servicio profesional de carrera comprenderá las etapas siguientes: --- (...) --- III. Terminación, por alguna de las causas señaladas en el artículo 61 de esta Ley, (...).’

‘61. Las relaciones jurídicas entre la Fiscalía General y su personal terminarán por las causas siguientes: --- I. Renuncia; --- (...) --- X. Cualquier otra causa prevista en las disposiciones legales aplicables.’.

De lo anterior, es posible advertir que a) existe un Servicio Profesional de Carrera que rige a los Ministerios Públicos Federales, b) sus relaciones laborales se rigen por la fracción XIII del apartado B del artículo 123 Constitucional y c) una de las causas de conclusión del servicio es por renuncia.

Ahora, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido también que la competencia para conocer de las relaciones laborales de las personas que desempeñen alguno de los cargos que prevé la fracción XIII del artículo 123 Constitucional corresponde, por afinidad, a los Tribunales de Justicia Administrativa, ya que no se trata de servidores públicos y no tienen una relación laboral con el Estado, sino una de carácter administrativa.

Es decir, dicha disposición, al diferenciar a los militares, marinos, personal del servicio exterior, agentes del Ministerio Público y miembros de las instituciones policiales, en cuanto a las reglas que regulan las relaciones del Estado con sus



CONTRADICCION DE CRITERIOS 2/2024

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

trabajadores, y señalar que deberán regirse por sus propias leyes, los excluye de la aplicación de las normas laborales establecidas en el citado apartado y su ley reglamentaria.

En este sentido, resulta inconcuso que la relación entre el Estado y dichas personas, por afinidad, es de naturaleza administrativa y se rige por normas administrativas y reglamentos que les correspondan; por consiguiente, las determinaciones que dichas entidades tomen en torno a esa relación deberán considerarse de naturaleza administrativa, por lo que el conocimiento de los conflictos suscitados con motivo de la prestación de los servicios de Ministerios Públicos, por afinidad, corresponde al Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Y es que, en el caso, se reclaman prestaciones derivadas de una relación entre la quejosa y la Fiscalía General de la República, en virtud de la conclusión de sus labores como Ministerio Público Federal, y con motivo de tal conclusión, la aplicación de lineamientos expedidos por la referida institución para su liquidación.

De ahí que si la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido en diversos criterios que debe atenderse a la afinidad que tienen los Tribunales de Justicia Administrativa para conocer de los conflictos que se susciten entre las personas que se desempeñen como militares, marinos, personal del servicio exterior, agentes del Ministerio Público y miembros de las instituciones policiales, es claro que si se reclama en el caso la liquidación por baja voluntaria de una agente del ministerio público federal y, con ello, la aplicación de lineamientos para cuantificar su liquidación, debe conocer el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Son aplicables, por identidad de razón, la jurisprudencia 2a./J. 31/2019 (10a.) y la tesis 2a. CLXI/98, ambas de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes:

‘TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA. ES COMPETENTE PARA CONOCER DEL RECLAMO DE RECONOCIMIENTO DE UN RIESGO DE TRABAJO ANTE EL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, FORMULADO POR AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO, PERITOS Y

$$(\dots)'$$
$$(\dots)'$$

En relación con la Jurisprudencia 2a./J. 49/2006, de rubro: **‘TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. CARECE DE COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE NULIDAD PROMOVIDO CONTRA LA RESOLUCIÓN DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS QUE IMPONE SANCIONES ADMINISTRATIVAS A SUS SERVIDORES PÚBLICOS.’**; es menester precisar que dicho criterio se refiere a las resoluciones que dicte el Órgano de Control Interno de la Cámara de Diputados **que impone sanciones administrativas a sus servidores públicos**, mas no se refiere a conflictos administrativo-laborales entre particulares y un órgano constitucional autónomo, como es el caso que nos ocupa.

Respecto de la Jurisprudencia 2a./J. 31/2020 (10a.), de rubro: **‘JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. ES IMPROCEDENTE CONTRA LAS RESOLUCIONES EMITIDAS POR EL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES (INAI), EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE PARTICULARES.’**; este órgano jurisdiccional también considera que es inaplicable, puesto que si bien no se desconoce que implica la improcedencia del juicio de nulidad federal respecto de actos atribuidos a un órgano constitucional autónomo, de la propia lectura que al efecto se realice del mismo, se podrá advertir que específicamente se

¹⁸ Registro digital: 194905, Instancia: Segunda Sala, Novena Época, Materias(s): Administrativa, Tesis: 2a. CLXI/98, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VIII, Diciembre de 1998, página 429.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

refiere a la improcedencia del juicio contencioso administrativo federal atendiendo al objetivo que tuvo la reforma constitucional en materia de transparencia publicada en el Diario Oficial de la Federación el siete de febrero de dos mil catorce; y, como a través de la misma lo que se buscó fue no alargar los procedimientos en materia de acceso a la información y tutelar de mejor manera ese derecho; pero de ninguna forma se refiere a la protección de los particulares sobre sus derechos laborales-administrativos frente a los actos de un órgano constitucional autónomo, como en el caso ocurre entre la quejosa y la Fiscalía General de la República.

Por otra parte, tampoco se considera que sea aplicable al caso el criterio contenido en la diversa jurisprudencia 2a./J 69/2015 (10a.), de rubro: **‘JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. ES IMPROCEDENTE CONTRA LAS RESPUESTAS NEGATIVAS DE LA AUTORIDAD CASTRENSE A LA SOLICITUD DE PRESTACIONES LABORALES, CIVILES O ADMINISTRATIVAS FORMULADAS POR MILITARES.’**, puesto que se refiere al régimen castrense, distinto al que se encontraba sujeto la quejosa.

En ese orden de ideas, al resultar substancialmente fundados los argumentos expuestos por la quejosa en su concepto de violación atendidos conforme a la causa de pedir, se considera procedente conceder la protección constitucional solicitada (...)" [lo destacado es de origen]

- 44.** La sentencia que precede se declaró cumplida en auto de ocho de noviembre de dos mil veintitrés.
- 45.** Dicho criterio dio origen a la tesis I.18°.A.2 A (11ª.)¹⁹, que establece:

¹⁹ Registro digital: 2027494, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Undécima Época, Materias(s): Administrativa, Tesis: I.18o.A.2 A (11a.), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 30, Octubre de 2023, Tomo V, página 5068, Tipo: Aislada

Justificación: Lo anterior, porque la Sala del conocimiento parte de un concepto erróneo del término "autonomía" para concluir que no es procedente el juicio contencioso administrativo en contra de actos de autoridades de la Fiscalía General de la República relacionados con la conclusión del servicio respecto de los servidores públicos que la integran, ya que si bien dicha Fiscalía cuenta con funciones de procuración de justicia, lo cierto es que el presidente de la República es quien participa de forma directa en la designación y remoción de su titular; por ello, el conocimiento de los conflictos suscitados entre esa Fiscalía y los servidores públicos que la integran, por la afinidad administrativa que guardan, corresponde al Tribunal Federal de Justicia Administrativa."

66

46. Por cuestión de orden, es necesario establecer si se configura la contradicción de criterios, en tanto que sólo bajo ese supuesto será posible efectuar el estudio relativo con el fin de determinar el criterio que, en su caso, deba prevalecer con carácter de jurisprudencia.
47. En principio, conviene precisar que la divergencia de criterios existe cuando los órganos jurisdiccionales contendientes adoptan en sus sentencias criterios jurídicos discrepantes sobre un **mismo punto de derecho**, con independencia de que las cuestiones fácticas que los rodeen no sean exactamente iguales.
48. Tal consideración se encuentra plasmada en la jurisprudencia P./J. 72/2010, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto, son los siguientes:

“CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES. De los artículos **107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo**, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan “tesis

"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.", al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

*permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución”.*²⁰

49. En ese contexto, si la finalidad de la contradicción de criterios es la unificación y el problema radica en los procesos de interpretación adoptados por los órganos jurisdiccionales contendientes, entonces es posible afirmar la existencia de una contradicción de criterios cuando se cumplen los siguientes requisitos:

a) Que los órganos jurisdiccionales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.

b) Que entre los ejercicios interpretativos respectivos exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general.

c) Que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer

²⁰ Visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XX XII, agosto de 2010, página 7. Registro Digital: 164120

50. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 22/2010, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes:

51. Con base en las anteriores precisiones, este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-

70



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

Norte, con residencia en la Ciudad de México, procede a verificar la actualización de los requisitos anunciados.

52. Primer requisito: ejercicio interpretativo y arbitrio judicial. Este elemento se satisface, porque los tribunales colegiados contendientes, al resolver las cuestiones litigiosas sometidas a su consideración, se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo para llegar a una solución determinada, como se aprecia del apartado en que se relataron los antecedentes de los criterios denunciados.

53. Segundo requisito: razonamiento y diferendo de criterios interpretativos. Inicialmente, este Pleno Regional estima que este requisito no se actualiza respecto del criterio contenido en el juicio de amparo directo **688/2023**, del índice del **Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito**, cuenta habida de que no se ocupó del tema analizado en los diversos asuntos que contienden en esta contradicción, consistente en determinar si es improcedente el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por razón de competencia, en términos de lo previsto en el artículo 8°, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en contra de actos derivados de conflictos suscitados por la prestación de servicios, entre la Fiscalía General de la República, en su calidad de órgano

54. Ciertamente, en la ejecutoria correspondiente al juicio de amparo directo **688/2023**, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, analizó la legalidad de la sentencia emitida por la Primera Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas y Derecho a la Buena Administración del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, **en materia de derechos por suministro de agua.**

55. Lo que demuestra que respecto de ese criterio, **no existe** algún elemento que permita establecer un punto de toque frente a las demás resoluciones contendientes, puesto que en él no se trató el tema relativo a la procedencia del juicio contencioso administrativo federal tramitado ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Razón por la que procede declarar **inexistente** la contradicción de criterios únicamente en relación con lo resuelto por el **Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito**, al resolver el juicio de amparo directo **688/2023**.

72

“CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. DEBE DECLARARSE INEXISTENTE CUANDO LA DISPARIDAD DE LOS CRITERIOS PROVIENE DE TEMAS, ELEMENTOS JURÍDICOS Y RAZONAMIENTOS DIFERENTES QUE NO CONVERGEN EN EL MISMO PUNTO DE DERECHO. Para que exista contradicción de tesis entre Tribunales Colegiados de Circuito, en términos de los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo, es necesario que: 1) Los Tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese; y, 2) Entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre algún punto en común, es decir, que exista al menos un razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico, como el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general. En ese tenor, si la disparidad de criterios proviene de temas, elementos jurídicos y razonamientos diferentes, que no convergen en el mismo punto de derecho, la contradicción de tesis debe declararse inexistente”.²²

57. Asimismo, resulta aplicable la tesis de jurisprudencia 2ª./J. 24/95²³, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente:

“CONTRADICCION DE TESIS. ES INEXISTENTE SI LOS CRITERIOS DIVERGENTES TRATAN CUESTIONES ESENCIALMENTE DISTINTAS.

Para que se configure la contradicción de tesis a que se refiere el artículo 197-A de la Ley de Amparo, es menester que las resoluciones pronunciadas por los Tribunales Colegiados que sustenten criterios divergentes traten

²² Visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, página 1219. Reg. digital 161114.

²³ Registro digital: 200766, Instancia: Segunda Sala, Novena Época, Materias(s): Común, Tesis: 2a./J. 24/95, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo II, Julio de 1995, página 59, Tipo: Jurisprudencia

cuestiones jurídicas esencialmente iguales; por tanto, si la disparidad de criterios proviene de temas diferentes, la contradicción es inexistente.”

58. En cambio, este Pleno Regional estima que en los ejercicios interpretativos realizados en los restantes criterios denunciados, sí existe un punto de toque, puesto que al examinar un mismo problema jurídico, adoptaron posturas discrepantes.
59. Así es, el **Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito**, al resolver, por unanimidad de votos el amparo directo **190/2023**, negó la protección constitucional solicitada, al considerar que la impugnación de los actos de la Fiscalía General de la República, generados con motivo de la relación jurídico administrativa con sus miembros, no correspondía al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en tanto que éstos se regulaban por sus propias leyes.
60. Lo anterior señaló, porque el artículo 73, fracción XXIX-H, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, otorgaba al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, una doble función; por un lado, imponer sanciones a los servidores públicos cuando incurrieran en una responsabilidad administrativa grave y por otro, resolver las controversias entre la administración pública federal y los particulares.

65. A lo que añadió, que no constituía obstáculo a su determinación, el contenido de los artículos 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en virtud de que éstos se referían a los casos en los que la separación, remoción, baja, cese, destitución o cualquier otra forma de terminación del servicio fuera injustificada, en los que la demandada sólo estaría obligada a pagar la indemnización y demás prestaciones legales, sin que en ningún caso procediera la reincorporación al servicio.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

66. De igual manera, puntualizó que tampoco constituía un obstáculo a su resolución, el contenido del artículo 3º, fracción XVI, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que establecía la procedencia del juicio contencioso en contra de las resoluciones definitivas por las que se impusieran sanciones administrativas a los servidores públicos en términos de la legislación aplicable, así como en contra de las que decidieran los recursos administrativos previstos en tales ordenamientos, además de las de los órganos constitucionales autónomos; cuenta habida de que esa norma no podía prevalecer sobre el artículo 73, fracción XXIX-H constitucional, conforme a los principios de supremacía constitucional y de interpretación conforme.

67. Por otro lado, el **Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito**, al resolver los juicios de amparo directo **788/2023** y **13/2023**, de manera similar, concedió el amparo solicitado, al considerar que en virtud de que la acción ejercida por la parte actora en el juicio de nulidad era formal y materialmente administrativa, competía, por afinidad al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, conocer de los conflictos derivados de la prestación de servicios de sus miembros, independientemente del origen de la controversia, esto es, ya fuera que se tratara de las

68. Habida cuenta, indicó, porque la Fiscalía General de la República, era un órgano constitucional autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que formaba parte del Sistema Nacional de Seguridad; además de que como lo resolvió el Alto Tribunal, de conformidad con el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la relación existente entre los elementos de los cuerpos de seguridad pública y el Estado no era de naturaleza laboral, sino administrativa.

69. A lo que agregó que no era obstáculo a su conclusión, lo resuelto en la contradicción de tesis 27/2006-SS, en la que se estableció que el artículo 73, fracción XXIX-H de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, acotaba la competencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, a resolver conflictos suscitados entre las unidades u órganos administrativos integrantes de la administración pública federal y los particulares, sin incluir a otros Poderes de la Unión y a los organismos autónomos; puesto que dicho criterio se dirigió a dilucidar la competencia de dicho Tribunal respecto de resoluciones emitidas por el Órgano Interno de Control de la Cámara de Diputados.

78



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

73. Finalmente, destacó que no pasaba inadvertida la tesis de rubro: *“POLICÍAS. COMPETENCIA PARA CONOCER DE LA BAJA DEL SERVICIO DE LOS. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA”*, pero que debía considerarse que actualmente se debía agotar el principio de definitividad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con fundamento en los artículos 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y 61 y 62 de la Ley de la Fiscalía General de la República.

74. De igual manera, el **Decimoctavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito**, atendiendo a la causa de pedir, concedió, por unanimidad de votos, el amparo solicitado en el juicio de amparo **581/2022**, al resolver que tanto en el caso de la legislación que regulaba a la otrora Procuraduría General de la República, como tratándose de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, el juicio contencioso administrativo era procedente. Habida cuenta de que aun cuando dicha Fiscalía era un organismo constitucional autónomo, que no formaba parte de la Administración Pública Federal, por lo que no pertenecía estructuralmente a un órgano constituido desde un punto de vista formal, no actuaba como instancia decisoria definitiva, puesto que sólo era una institución encargada de la representación social y de la procuración de justicia, pero en

cuanto a sus aspectos técnicos, mas no así en los de gobierno y administración.

75. Así, especificó que la autoridad responsable partió de una concepción errónea del término autonomía, además de que aquella no equivalía a soberanía, en tanto que toda competencia tenía límites; por lo que debía desestimarse la idea de que la autonomía equivalía a la no pertenencia a una estructura o a un órgano constituido, porque podían existir instituciones o empresas públicas que formaran parte de un órgano de gobierno y que tenían competencia autónoma. Habida cuenta de que la nota distintiva de la autonomía únicamente radicaba en que los organismos o entidades autónomas ejercieran sus respectivas atribuciones, sin interferencia de otros órganos.

76. En ese sentido, explicó que tratándose de la Fiscalía General de la República, a pesar de que tenía el carácter de autónoma conforme a lo dispuesto en el artículo 102 constitucional, por regla general su titular era propuesto por el Presidente de la República y aprobado por la Cámara de Senadores (la que en algunos casos también podría designarlo), por lo que su competencia no estaba fuera del ámbito de atribuciones del gobierno federal, en tanto que el Presidente Constitucional podía removerlo.

77. Razón por la que aun cuando la Fiscalía General de la República, no perteneciera estructuralmente a un órgano

31. Asimismo, también consideró inaplicable la tesis de jurisprudencia 2ª./J. 31/2020 (10ª.) de rubro: “*JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. ES IMPROCEDENTE CONTRA LAS RESOLUCIONES EMITIDAS POR EL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES (INAI), EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE PARTICULARES*”, puesto que el criterio que le dio origen, tuvo como finalidad evitar que se alargaran los procedimientos en materia de acceso a la información y tutelar de mejor manera ese derecho, pero no se refirió a la protección de los particulares sobre sus derechos laborales-administrativos frente a los actos de un órgano constitucional autónomo.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

82. En ese orden de ideas, se evidencia **la existencia de la contradicción de criterios denunciada**, pues los Tribunales Colegiados se pronunciaron respecto del mismo tema, consistente en **la improcedencia** del juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por razón de competencia, en términos de lo previsto en el artículo 8º, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en contra de actos derivados de conflictos suscitados por la prestación de servicios, entre la Fiscalía General de la República, en su calidad de órgano constitucional autónomo y sus miembros, en su relación administrativa, arribando a conclusiones diversas.

83. Habida cuenta de que mientras que el Primer y Cuarto Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Primer Circuito, determinaron sustancialmente que el juicio era improcedente ante la incompetencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, para conocer de los conflictos entre la Fiscalía General de la República, en su carácter de órgano constitucional autónomo y sus miembros, conforme a lo dispuesto en el artículo 73, fracción XXIX-H, constitucional; los diversos tribunales Segundo, Décimo Segundo y Decimoctavo de la misma materia y jurisdicción, resolvieron de manera similar, que dicho juicio sí era procedente, en tanto que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, sí tenía competencia para resolver de tales conflictos, al existir



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

86. Asimismo, se destaca que este Pleno Regional no desconoce que los diversos juicios de amparo en que se sustentaron los criterios contendientes, fueron promovidos por miembros de la Fiscalía General de la República, con diferentes cargos²⁴ y en contra de diversos actos; sin embargo, tales circunstancias fácticas diversas no son óbice para concluir la existencia de un punto de toque entre los criterios contendientes, cuenta habida de que en todos los casos, los tribunales colegiados se pronunciaron sobre la

²⁴ D.A. 190/2023 del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. Perito en balística, quien reclamó el oficio emitido por el Coordinador General de Servicios Periciales de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República, a través del que se le notificó que su plaza fue suprimida y por tanto, se dio por terminada su relación administrativa.

D.A.788/2022 del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. Comisario investigador de la Policía Federal Ministerial de la Fiscalía General de la República, el que reclamó la resolución emitida por el Director General de Mandamientos Ministeriales y Judiciales en suplencia por ausencia del Titular de la Policía Federal Ministerial de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República, en la que se ordenó la supresión de su plaza.

D.A. 807/2022 del Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. Oficial investigador “B”, quien reclamó la resolución emitida por el Director de Mandamientos Ministeriales y Judiciales de la Policía Federal Ministerial, en la que ordenó la supresión de su plaza por razones presupuestales.

D.A. 581/2022 del Decimoctavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. Agente del ministerio público federal, quien reclamó la resolución emitida por el Titular del Departamento de Recursos Materiales, en suplencia por ausencia del Subdelegado Administrativo de la Delegación Estatal en Quintana Roo, en la que se determinó su liquidación, derivada de la conclusión de la relación laboral con la Fiscalía General de la República.

De los juicios de amparo D.A. 13/2023 del Segundo Tribunal y D.A. 229/2023 del Cuarto Tribunal, ambos Colegiados en Materia Administrativa del Primer Circuito, no se advierten datos que permitan concluir el cargo que ostentaban los quejosos; sin embargo, en ambos casos, los órganos colegiados reconocieron la existencia de una relación administrativa entre aquéllos y la Fiscalía General de la República.

Habida cuenta de que en el juicio de amparo directo 13/2023, se especificó que uno de los actos impugnados en el juicio de nulidad, consistió en la resolución en que se informó al impugnante que había causado baja por separación del servicio de carrera (foja 5 de la sentencia respectiva).

Mientras que en el diverso juicio de amparo 229/2023, el Cuarto Tribunal Colegiado, hizo referencia al concepto de violación hecho valer por el solicitante de amparo, en el que destacó la existencia de una relación administrativa entre la autoridad demandada y un elemento perteneciente a la Fiscalía General de la República (párrafo 34 de su sentencia). En el juicio de nulidad se impugnó la elaboración, revisión y autorización de la Hoja Única de Servicios, que tiene el carácter de una prestación laboral.

87. Razón por la que se concluye que los diferentes hechos destacados, son secundarios o accidentales, y por tanto, no inciden en la naturaleza del problema jurídico a resolver²⁵.

88



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

88. Tercer requisito: formulación de una pregunta genuina respecto de la cuestión jurídica. Este último requisito se actualiza, ya que a partir del punto de toque y diferendos interpretativos entre los criterios sustentados por los tribunales contendientes, se desprende la siguiente cuestión: **¿Es improcedente el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por razón de competencia, en términos de lo previsto en el artículo 8º, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en contra de actos derivados de conflictos suscitados por la prestación de servicios, entre la Fiscalía General de la República, en su calidad de órgano constitucional autónomo y sus miembros, en su relación administrativa?**

VI. ESTUDIO DE FONDO.

89. Debe prevalecer con carácter de jurisprudencia el criterio sustentado por este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, de acuerdo con las siguientes consideraciones.

solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución.(Registro digital: 164120, Instancia: Pleno, Novena Época,Materias(s): Común, Tesis: P./J. 72/2010, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXII, Agosto de 2010, página 7, Tipo: Jurisprudencia)

90



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

91. En efecto, la materia de la presente contradicción de criterios está limitada a lo resuelto por los tribunales contendientes, los que únicamente se pronunciaron sobre la **competencia** del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en un caso concreto, esto es, contra actos de la Fiscalía General de la República, como órgano constitucional autónomo.
92. Como se ha indicado, los criterios contendientes derivaron de juicios de amparo directo promovidos por servidores públicos integrantes de la Fiscalía General de la República, en su carácter de órgano constitucional autónomo²⁹.
93. El referido carácter de órgano constitucional autónomo se reconoció en el artículo 102, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos³⁰, mediante

²⁹ Dicho carácter se le reconoció formalmente mediante declaratoria publicada en el Diario Oficial de la Federación de veinte de diciembre de dos mil dieciocho, en la que se estableció: “El Congreso de la Unión declara la entrada en vigor de la Autonomía Constitucional de la Fiscalía General de la República, de conformidad con el primer párrafo del artículo décimo sexto transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política-electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014.”

³⁰ “Artículo 102.-

(REFORMADO, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014)

A. El Ministerio Público se organizará en una Fiscalía General de la República como órgano público autónomo, dotado de personalidad jurídica y de patrimonio propios.

Para ser Fiscal General de la República se requiere: ser ciudadano mexicano por nacimiento; tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la designación; contar, con antigüedad mínima de diez años, con título profesional de licenciado en derecho; gozar de buena reputación, y no haber sido condenado por delito doloso.

El Fiscal General durará en su encargo nueve años, y será designado y removido conforme a lo siguiente:

1. A partir de la ausencia definitiva del Fiscal General, el Senado de la República contará con veinte I. para integrar una lista de al menos diez candidatos al cargo, aprobada por las dos terceras partes de los miembros presentes, la cual enviará al Ejecutivo Federal.

Si el Ejecutivo no recibe la lista en el plazo antes señalado, enviará libremente al Senado una terna y designará provisionalmente al Fiscal General, quien ejercerá sus funciones hasta en tanto se

94. En la exposición de motivos (de fecha catorce de septiembre de dos mil diez, gaceta número 139) que dio origen a dicha reforma se expuso:

(...)"



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

DOTAR DE AUTONOMÍA AL MINISTERIO PÚBLICO Y HACER MÁS EFICIENTE SU ESTRUCTURA

El suscrito, Tomás Torres Mercado, senador a la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por los artículos 8, numeral 1, fracción I, 164 y 171, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Asamblea la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Una de las principales preocupaciones de los mexicanos es la seguridad pública y la justicia. Hoy, regiones y comunidades enteras de nuestro país viven una situación de inseguridad nunca antes vista en la historia de México como nación independiente.

Muchos son los factores que nos han conducido a esta grave situación, incluyendo la terrible desigualdad que caracteriza a nuestra sociedad y la falta de oportunidades que padecen millones de jóvenes mexicanos. Sin embargo, como hemos señalado anteriormente, la inseguridad que vivimos todos también se alimenta de la falta de aplicación de las normas vigentes, lo que genera un círculo interminable de impunidad y violencia. Al final, queda claro que de poco o nada sirve expedir nuevas leyes, incrementar las penas o crear nuevos tipos penales, si los criminales no son llevados a juicio y castigados.

La realidad es que nuestro Estado ha sido incapaz de garantizar la investigación y persecución de los delitos, que es condición necesaria para alcanzar el debido castigo de los responsables. Nuestro andamiaje constitucional deposita esta importante tarea en el Ministerio Público y le otorga amplias facultades en la materia.

Desafortunadamente, esta institución se encuentra rebasada por las circunstancias actuales. En el Ministerio Público normalmente priva la ineficiencia, el rezago en la atención de los asuntos y la discrecionalidad. No es exagerado afirmar que actualmente es visto por una parte importante de la población como una figura que atropella, extorsiona y es parcial en su actuación. Lo que es alarmante si consideramos que el Ministerio Público tiene la función de representar a la sociedad y defender sus intereses. En gran medida, esta situación se debe a su dependencia del Poder

En este contexto, consideramos necesario impulsar una reforma profunda del Ministerio Público que lo haga compatible con las exigencias y objetivos de un moderno Estado democrático de Derecho. De forma concreta proponemos reformar el artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a fin de dotarlo de autonomía técnica y de gestión, personalidad y patrimonio propios.

Con el fin de garantizar dicha autonomía, a través de la presente iniciativa proponemos que el Ministerio Público sea presidido por un Procurador General de la República, elegido por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores o, en sus recesos, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, de entre la terna que proponga la comisión ordinaria del senado encargada de esta tarea. Dicha comisión deberá realizar de forma previa una amplia consulta con instituciones académicas y organizaciones representativas de la sociedad civil.

Por otro lado, pensamos que la autonomía constitucional no es suficiente para asegurar el profesionalismo y la eficiencia del Ministerio Público. Debemos recordar que en México los agentes que lo integran son ubicados y removidos de forma arbitraria, carecen de salarios dignos y cuentan con pocas oportunidades de especialización y mejora laboral. Tales factores limitan su desempeño. En este sentido proponemos establecer de forma expresa que los agentes del Ministerio Público gozarán de garantías de acceso, estabilidad,

“(...)

$$(\dots)$$

96

CONTRADICCION DE CRITERIOS 2/2024

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

(...)

La Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República tiene como objeto establecer sus atribuciones, organización y funciones, así como de los órganos que la integran, para el despacho de los asuntos que al Ministerio Público y a la Policía de Investigación le confiere la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Código Nacional de Procedimientos Penales, y las demás disposiciones aplicables.

De esta manera, se establece que la Fiscalía General de la República prevea la institución del Ministerio Público integrada en una Fiscalía General de la República como órgano público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios con autonomía presupuestal, técnica y de gestión así como con capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto, en los términos que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las demás leyes aplicables, la cual estará a cargo de un Fiscal General.

(...)”. [lo resaltado es de este Pleno Regional]

98. La Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, se abrogó mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinte de mayo de dos mil veintiuno, con motivo de la expedición de la Ley de la Fiscalía General de la República, respecto de la cual, en la exposición de motivos que le dio origen (siete de octubre de dos mil veinte, Gaceta No. LXIV/3PPO-27/112932), se expuso:

“(...)

*Es necesaria la expedición de una Ley de la Fiscalía General de la República que **tenga por objeto establecer la integración, funcionamiento y atribuciones de la Fiscalía General de forma clara y realista, así como la organización del Ministerio Público de la Federación, conforme a las facultades que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos le confiere, organizándose en una Fiscalía General de la República como órgano público autónomo, dotado de personalidad jurídica y de patrimonio propio.***

En ese sentido, se considera necesaria una serie de principios que regirán la actuación de todos los servidores públicos de la Fiscalía General, tales como: legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez, respeto a los derechos humanos, lealtad, imparcialidad, especialidad y perspectiva de género.

Del mismo modo, no podemos dejar de observar la calidad del Ministerio Público como representante de la sociedad, mediante la cual le corresponde actuar como garante del acceso a la justicia de todos aquellos que en forma directa o indirecta han visto vulnerados derechos e intereses jurídicamente tutelados.

En ese contexto, se dispone que corresponderá al Ministerio Público de la Federación, en representación de los intereses de la sociedad, la investigación y ejercicio de la acción penal ante los tribunales de los delitos de su competencia, la preparación y el ejercicio de la acción de extinción de dominio, así como la intervención en todos los asuntos que correspondan a sus funciones constitucionales.

Así pues, en apego a lo establecido en la Constitución General, en una pregunta que atienda estas circunstancias se dispone que el Ministerio Público ejercerá la representación de la sociedad de manera puntual, eficiente y eficaz, en todos los asuntos que esta u otras disposiciones legales establezcan.

Por otro lado, es de señalar que acorde con la reforma constitucional del 26 de marzo del 2019, mediante la cual se reconoce a la Guardia Nacional como una institución de seguridad pública de carácter civil, disciplinado y profesional, se precisa en el presente proyecto que la colaboración de la Guardia Nacional respecto a la investigación de los delitos se llevará a cabo bajo el mando y conducción del Ministerio Público.

Dicho lo anterior, es preciso también señalar que por lo que respecta a la duración del cargo del titular de la Fiscalía General, y conforme a lo dispuesto en el artículo 102, apartado A, párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se establece que su encargo será por un período de nueve años, y su designación y remoción deberán realizarse de conformidad con lo dispuesto en el texto constitucional, garantizando el principio de paridad de género a que refiere el artículo 41 de la Constitución.

(...)

Por otro lado, se dispone un listado de facultades que corresponderán a la Fiscalía General en su calidad de órgano autónomo. En virtud de lo anterior, la Fiscalía General podrá determinar sus políticas para la investigación y persecución penal en el ámbito federal, coordinarse con



CONTRADICCION DE CRITERIOS 2/2024

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

otras autoridades para cumplir los fines de la seguridad pública, promover la celebración de tratados internacionales y suscribir los acuerdos interinstitucionales necesarios para el cumplimiento de sus funciones, así como remitir al Congreso de la Unión la postura institucional mediante una opinión técnica jurídica sobre las iniciativas de ley, reformas constitucionales o legales que en el ámbito de su competencia sean presentadas por el Ejecutivo Federal y en las Cámaras del Congreso de la Unión, solo por mencionar algunas.

Asimismo, para el desempeño de sus funciones la Fiscalía General contará con equipos de investigación y litigación, los cuales tendrán como función organizar y gestionar la estrategia de la Fiscalía General de la República de forma eficiente, desarrollando las investigaciones conforme a planes de investigación congruentes, que permitan la pronta determinación de los asuntos o su judicialización cuando las circunstancias del caso así lo ameriten.

(...)

Del mismo modo, se establece un régimen de obligaciones para los agentes del Ministerio Público, agentes de la Policía Federal Ministerial, peritos, analistas y facilitadores, así como un marco especial de obligaciones para los agentes de la Policía Federal Ministerial, peritos y analistas, en razón de la naturaleza misma de sus funciones, cuyo incumplimiento dará lugar al procedimiento y sanciones que correspondan.

(...)

Ahora bien, por cuanto hace al crecimiento y desarrollo profesional de los servidores públicos de la Fiscalía General, en la presente propuesta se han establecido las bases para articular e implementar el Servicio Profesional de Carrera como un sólido sistema de profesionalización y desarrollo humano.

En ese sentido, el Estatuto del Servicio Profesional de Carrera será el instrumento que desarrollará las bases y procedimientos para su implementación.

El Servicio Profesional de Carrera será un sistema integral de regulación del empleo público de todo el personal de la Fiscalía General de la República organizado con la finalidad de estimular el crecimiento y desarrollo profesional y humano del personal, propiciando la estabilidad laboral y reforzando la identidad institucional. Estará compuesto de las siguientes etapas:

- I. Ingreso;
II. Desarrollo;
III. Terminación, y

Es preciso señalar que cada una de estas etapas, conlleva a su vez una serie de procesos específicos a efecto de implementar el Servicio Profesional de Carrera acorde a las necesidades de la Fiscalía General.

En este contexto, con la finalidad de verificar que el personal de nuevo ingreso se apegue a los principios institucionales de acuerdo al perfil del puesto, y que el personal activo actúe dentro del marco de conducta que dicta la normatividad institucional, se disponen procesos de evaluación y certificación.

$$(\dots)$$

Asimismo, se dispone que en aquellos casos en que la forma de terminación del servicio fuese declarada mediante sentencia definitiva como injustificada, la Fiscalía General estará obligada a pagar la indemnización correspondiente, y demás prestaciones conforme a la ley, sin que en ningún caso proceda la reincorporación del servidor público.

$$(\dots)$$

En ese sentido, el personal que forme parte del Servicio Profesional de Carrera incurrirá en faltas administrativas, cuando incumpla o transgreda el contenido de sus obligaciones; precisando que en los casos de faltas administrativas atribuibles a personal de la rama sustantiva, la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos será la encargada de imponer la sanción que corresponda, conforme al procedimiento previsto en este mismo ordenamiento, y demás disposiciones normativas.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

Bajo esa línea de consideración, las sanciones que podrán ser impuestas a dicho personal, consistirán en amonestación pública o privada, suspensión de empleo cargo o comisión hasta por noventa días sin goce de sueldo o remoción, según corresponda.

Mientras que, para el caso del personal de la rama administrativa, se prevé que sea el Órgano Interno de Control quien lleve a cabo el procedimiento y aplicación de las sanciones que se deban imponer por faltas administrativas, bajo las normas de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

$$(\dots)$$

En relación con el Órgano Interno de Control, se dispone que será una unidad dotada de autonomía técnica y de gestión por lo que refiere a su régimen interior, pero sujeta en todo momento en su estructura orgánica a la jerarquía institucional y facultades legales y normativas de cada unidad de la Fiscalía General.

El Órgano Interno de Control tendrá a su cargo prevenir, corregir, investigar y calificar los actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas de los servidores públicos de la Fiscalía General, para efecto de sancionar aquellas distintas a las que son competencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; así como para revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia, aplicación de recursos públicos federales.

(...)” [lo destacado es propio de este Pleno Regional]

99. Bajo ese contexto, es posible deducir que la **autonomía** que se otorgó a la Fiscalía General de la República, tuvo como finalidad que la institución del Ministerio Público fuera capaz de investigar y perseguir las conductas delictivas con objetividad, eficiencia y eficacia y con independencia de los poderes públicos e incluso los partidos políticos. Así como para regular su funcionamiento y el servicio profesional de carrera.

100. En relación con el carácter de órgano constitucional autónomo de la Fiscalía General de la República, Miguel Alejandro López Olvera, Enrique Meza Márquez y Luis Fernando Ruiz Pérez³¹, expusieron:

“(…)

INTRODUCCIÓN

La transformación de las procuradurías generales de justicia por fiscalías generales de justicia, no es sólo un cambio de denominación, sino un cambio sustantivo en las funciones que desempeña el ministerio público en la investigación de los delitos.

Pero en este trabajo de investigación nos interesa destacar que las nuevas fiscalías generales de justicia ahora cuentan con autonomía constitucional, lo cual se traduce en que, en teoría, no debiera haber ningún tipo de intromisión en las tareas que desarrollará este nuevo órgano constitucional autónomo.

“(…)

II. AUTONOMÍA Y SISTEMAS PENALES

“(…)

*Es por ello, que la autonomía de las fiscalías generales de justicia es muy importante para **el buen funcionamiento del nuevo sistema de corte oral, adversarial**. El ministerio público solo debe ser vigilado y controlado por un juez especializado, pero **no tener dependencia jerárquica con ningún poder u órgano del Estado**, ya que uno de los rasgos característicos de este nuevo modelo es que las nuevas fiscalías actúen, tanto normativa como fácticamente, con total independencia.*

“(…)

III. LOS ESTÁNDARES INTERNACIONALES APLICABLES A LA AUTONOMÍA INSTITUCIONAL DE LAS FISCALÍAS.

En el escenario internacional, diversos órganos, tanto del sistema universal como de carácter regional, han abordado el alcance y contenido mínimos exigibles sobre la autonomía e independencia funcional, orgánica, presupuestal y operativa de la función punitiva del Estado, con relación a los demás poderes tradicionales.

“(…)

En ese sentido, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al igual que los órganos y procedimientos

ERIKA IVONNE CARBALLAL LÓPEZ
7066620636465200000000000000001269
15/05/26 18:00:00

³¹ <https://archivos.juridicas.unam.mx/222./bjv/libros/13/6169/7.pdf>. Consultado el 12/06/2024

del sistema universal, ha destacado la importancia de la independencia de los agentes de procuración de justicia, incluyendo a los fiscales, para garantizar el acceso a la justicia de todas las personas sujetas a la jurisdicción del Estado de que se trate. A la luz del derecho internacional, la independencia de los operadores de justicia se manifiesta en dos dimensiones que los Estados tienen el deber de garantizar: la primera, la institucional o de sistema y, la segunda, funcional o del ejercicio individual de las y los operadores de justicia.³²

En cuanto a la independencia institucional, esta puede ser definida como la relación que guarda la entidad de justicia dentro del sistema del Estado respecto de otras esferas de poder e instituciones estatales.³³ Por tanto, la ausencia de dicha independencia importa en los hechos la subordinación o dependencia de la actuación de los ministerios públicos a otros poderes o instituciones ajenos a las fiscalías, en detrimento de su actuación.³⁴

Por lo que se refiere a la esfera funcional de la independencia de los fiscales, ésta se constituye de las garantías de independencia para ejercer de manera libre sus labores en el conocimiento de los casos en el ejercicio de sus atribuciones.³⁵ En este sentido, los procedimientos y las cualificaciones para el nombramiento de los fiscales, la estabilidad de su encargo, así como la seguridad jurídica en el régimen de ascensos, traslados, suspensión y la cesación que brinden sustento efectivo al ejercicio de la función de los fiscales respecto de los demás órganos o poderes del Estado, constituyen garantías imprescindibles para la independencia material de las fiscalías y ministerios públicos, en clave de derechos humanos.

(...)

IV. REFORMA CONSTITUCIONAL DE 2014

(...)

El 14 de diciembre de 2018, se publicó el Decreto por el que se expide la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República (FGR) dando paso a la creación de un nuevo

³² CIDH, *Garantías para la independencia de la y los operadores de justicia: Hacia el fortalecimiento del acceso a la justicia y el estado de derechos en las Américas*. OEA/Ser.L/V/II.Doc. 44,5 diciembre 2013, párr. 25

³³ ONU, *Informe de la Relatora Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados*, A/HRC/14/26, 9 de abril de 2010, párr. 17

³⁴ Corte IDH. *Caso Reverón Trujillo Vs. Venezuela*, excepción preliminar, fondo, reparaciones y costas, sentencia del 30 de junio de 2009, serie C, núm. 197, párr. 67.

³⁵ ONU. Comité de Derechos Humanos, CCPR/C/GC/32, párr. 19

(...)

$$(\dots)$$

(...)"

104

103. Así, puede derivarse que la autonomía de que goza la Fiscalía General de la República, no le otorga el carácter de órgano soberano e independiente del Estado, sino que surgió con motivo de una nueva concepción de éste, basada en una idea de equilibrio constitucional, fundada en los controles de poder.

104. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver en sesión de veintidós de mayo de dos mil seis, la controversia constitucional **32/2005**³⁷ (promovida por el municipio de Guadalajara, Jalisco), determinó que *los órganos constitucionales autónomos surgen con motivo de*

³⁷ “(...) Ante todo debe asentarse que los órganos constitucionales autónomos se concibieron y desarrollaron en Europa y su establecimiento se expandió por Asia y América.--- De acuerdo con la doctrina, los órganos constitucionales autónomos surgen con motivo de una nueva concepción del Poder, bajo una idea de equilibrio constitucional basada en los controles de poder, evolucionando con ello la teoría tradicional de la división de poderes, por lo que se dejó de concebir la organización del Estado derivada de los tres poderes tradicionales (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), que sin perder su esencia, ahora se habla de que dicho principio debe considerarse como una distribución de funciones o competencias, para hacer más eficaz el desarrollo de las actividades encomendadas al Estado.--- Su creación se justificó por la necesidad de establecer órganos encaminados a la defensa de los derechos fundamentales y de lograr controlar la constitucionalidad de los actos de los depositarios clásicos del poder público, en virtud de la excesiva influencia que éstos recibían de intereses económicos, religiosos, de partidos políticos y de otros factores reales de poder, que habían perjudicado los derechos alcanzados hasta ese momento en beneficio de la clase gobernada, lo que motivó su establecimiento en los textos constitucionales dotándolos de garantías de actuación e independencia en su estructura orgánica para que alcanzaran los fines para los cuales se habían creado, esto es, para que ejerzan una función propia del Estado, que por su especialización e importancia social requería autonomía de los clásicos poderes del Estado.--- El sistema jurídico mexicano no ha sido la excepción a esta nueva concepción de distribución del poder público, pues como se señaló, a través de diversas reformas constitucionales se han establecido órganos autónomos cuya actuación no está sujeta ni atribuida a los depositarios tradicionales del poder público, a los que se les ha encargado funciones estatales específicas, con el fin de obtener una mayor especialización, agilización, control y transparencia de esas funciones, para atender eficazmente las demandas sociales; sin que con ello se altere o destruya la tradicional doctrina de la división de poderes, pues la circunstancia de que los referidos organismos guarden autonomía e independencia de los poderes primarios, no significa que no formen parte del Estado mexicano, pues su misión principal, se reitera, radica en atender necesidades torales tanto del Estado como de la sociedad en general, conformándose como nuevos organismos que se encuentran a la par de los órganos tradicionales.--- Aun cuando no existe precepto constitucional que regule la existencia de los órganos constitucionales autónomos como se ha señalado, las características esenciales que se desprenden tienen dichos órganos son: --- a) Deben estar establecidos y configurados directamente en la Constitución.--- b) Deben mantener con los otros órganos del Estado relaciones de coordinación.--- c) Deben contar con autonomía e independencia funcional y financiera.--- d) Deben atender funciones coyunturales del Estado que requieran ser eficazmente atendidas en beneficio de la sociedad.--- (...)”

una nueva concepción del Poder, bajo una idea de equilibrio constitucional basada en los controles de poder, evolucionando con ello la teoría tradicional de la división de poderes, por lo que se dejó de concebir la organización del Estado derivada de los tres poderes tradicionales (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), (...) [y su] actuación no está sujeta ni atribuida a los depositarios tradicionales del poder público, a los que se les ha encargado funciones estatales específicas, con el fin de obtener una mayor especialización, agilización, control y transparencia de esas funciones, para atender eficazmente las demandas sociales; sin que con ello se altere o destruya la tradicional doctrina de la división de poderes, pues la circunstancia de que los referidos organismos guarden autonomía e independencia de los poderes primarios, no significa que no formen parte del Estado mexicano.

105. La propia Segunda Sala, al resolver el amparo en revisión **1100/2005³⁸**, en sesión de dieciséis de agosto de dos mil

³⁸ “(...) a. **División de poderes y garantía institucional**

65. A través de numerosos precedentes esta Suprema Corte ha dado interpretación al artículo 49 de la Constitución Federal; precepto en el que se establece el principio de división de poderes y que constituye un mecanismo normativo de racionalización del poder público por la vía de su límite y balance, tanto orgánico, como funcional; y con el fin último de garantizar el principio democrático, los derechos fundamentales y sus garantías.

66. Por lo que se refiere a la aplicación del principio de división de poderes tratándose de órganos constitucionales autónomos el Tribunal Pleno ha determinado, a partir del reconocimiento de que se trata de un principio evolutivo, que éste constituye uno de los parámetros de validez constitucional al que deben atender tales órganos. Desde esta perspectiva, el Tribunal Pleno ha establecido que los órganos constitucionales autónomos:

1. Surgen bajo una idea de equilibrio constitucional basada en los controles de poder, evolucionando así la teoría tradicional de la división de poderes dejándose de concebir la organización del Estado derivada de los tres tradicionales (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) que, sin perder su esencia, debe considerarse como una distribución de funciones o competencias, haciendo más eficaz el desarrollo de las actividades encomendadas al Estado. 2. Se establecieron en los textos constitucionales, dotándolos de garantías de actuación e independencia en su

estructura orgánica para que alcancen los fines para los que fueron creados, es decir, para que ejerzan una función propia del Estado que por su especialización e importancia social requería autonomía de los clásicos poderes del Estado. 3. La creación de este tipo de órganos no altera o destruye la teoría tradicional de la división de poderes, pues la circunstancia de que los referidos órganos guarden autonomía e independencia de los poderes primarios, no significa que no formen parte del Estado mexicano, pues su misión principal radica en atender necesidades torales tanto del Estado como de la sociedad en general, conformándose como nuevos organismos que se encuentran a la par de los órganos tradicionales. Atento a lo anterior, las características esenciales de los órganos constitucionales autónomos son: a) Deben estar establecidos directamente por la Constitución Federal; b) Deben mantener, con los otros órganos del Estado, relaciones de coordinación; c) Deben contar con autonomía e independencia funcional y financiera; y d) Deben atender funciones primarias u originarias del Estado que requieran ser eficazmente atendidas en beneficio de la sociedad.

108



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

coordinación a modo de control recíproco para evitar el abuso en el ejercicio del poder público.

106. Razones por la que es dable concluir que aunque la Fiscalía General de la República, tiene el carácter de órgano constitucional autónomo, sigue formando parte del Estado, pero bajo una nueva concepción de independencia de los poderes primarios, con los que se establece un régimen de cooperación y coordinación a fin de ejercer un control recíproco que evite el abuso en el ejercicio del poder público y de que se atiendan las necesidades totales tanto del propio Estado como de la sociedad en general.

107. Resultan ilustrativas, las tesis de jurisprudencia P./J. 20/2007³⁹, P./J. 12/2008⁴⁰ y 2ª. CLXVI/2017 (10ª.)⁴¹, que disponen respectivamente:

“ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS. NOTAS DISTINTIVAS Y CARACTERÍSTICAS.- El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de los órganos constitucionales autónomos ha sostenido que: 1. Surgen bajo una idea de equilibrio constitucional basada en los controles de poder, evolucionando así la teoría tradicional de la división de poderes dejándose de concebir la organización del Estado derivada de los tres tradicionales

³⁹ Registro digital: 172456, Instancia: Pleno, Novena Época, Materias(s): Constitucional, Tesis: P./J. 20/2007, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXV, Mayo de 2007, página 1647, Tipo: Jurisprudencia

⁴⁰ Registro digital: 170238, Instancia: Pleno, Novena Época, Materias(s): Constitucional, Tesis: P./J. 12/2008, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVII, Febrero de 2008, página 1871, Tipo: Jurisprudencia

⁴¹ Registro digital: 2015478, Instancia: Segunda Sala, Décima Época, Materias(s): Constitucional, Tesis: 2a. CLXVI/2017 (10a.), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 48, Noviembre de 2017, Tomo I, página 603, Tipo: Aislada

“ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS. SUS CARACTERÍSTICAS.- Con motivo de la evolución del concepto de distribución del poder público se han introducido en el sistema jurídico mexicano, a través de diversas reformas constitucionales, órganos autónomos cuya actuación no está sujeta ni atribuida a los depositarios tradicionales del poder público (Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial), a los que se les han encargado funciones estatales específicas, con el fin de obtener una mayor especialización, agilización, control y transparencia para atender eficazmente las demandas sociales; sin que con ello se altere o destruya la tradicional doctrina de la división de poderes, pues la circunstancia de que los referidos organismos guarden autonomía e independencia de los poderes primarios, no significa que no formen parte del Estado mexicano, ya que su misión principal radica en atender necesidades totales tanto del Estado como de la sociedad en general, conformándose como nuevos organismos que se encuentran a la par de los órganos tradicionales. Ahora bien, aun cuando no existe algún precepto constitucional que regule la existencia de los



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

órganos constitucionales autónomos, éstos deben: a) estar establecidos y configurados directamente en la Constitución; b) mantener con los otros órganos del Estado relaciones de coordinación; c) contar con autonomía e independencia funcional y financiera; y, d) atender funciones coyunturales del Estado que requieran ser eficazmente atendidas en beneficio de la sociedad.”

“GARANTÍA INSTITUCIONAL DE AUTONOMÍA. SU APLICACIÓN EN RELACIÓN CON LOS ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha interpretado el principio de división de poderes, contenido en el artículo 49 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como un mecanismo de racionalización del poder público por la vía de su límite y balance, con el fin de garantizar el principio democrático, los derechos fundamentales y sus garantías, a través de un régimen de cooperación y coordinación de competencias, a manera de control recíproco, limitando y evitando el abuso en el ejercicio del poder público. Dicho principio es evolutivo y a través de su desarrollo se han establecido nuevos mecanismos para controlar el poder, con la finalidad de hacer más eficaz el funcionamiento del Estado; de ahí que se haya dotado a ciertos órganos, como los constitucionales autónomos, de las facultades necesarias para alcanzar los fines para los que fueron creados y en atención a la especialización e importancia social de sus tareas. Ahora bien, los órganos constitucionales autónomos forman parte del Estado mexicano sin que exista a su favor una delegación total de facultades de otro cuerpo del Estado, sino que su función es parte de un régimen de cooperación y coordinación a modo de control recíproco para evitar el abuso en el ejercicio del poder público; no obstante, debe advertirse que cuentan con garantías institucionales, las cuales constituyen una protección constitucional a su autonomía y, en esa medida, se salvaguardan sus características orgánicas y funcionales esenciales; **de forma que no podría llegarse al extremo de que un poder público interfiera de manera preponderante o decisiva en las atribuciones de un órgano constitucional autónomo** pues, de lo contrario, se violentaría el principio de división de poderes consagrado en el artículo 49 de la Constitución Federal.”

109. La Segunda Sala del Alto Tribunal, al resolver la contradicción de tesis 27/2006-SS⁴² (cuya materia se centró en decidir si el entonces Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa era competente para conocer del juicio promovido en contra de una resolución emitida por la Contraloría Interna de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con base en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores

112



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

Públicos) en sesión de diecisiete de marzo de dos mil seis, precisó lo siguiente:

“(. . .)

En primer término, resulta de especial relevancia precisar que los Tribunales Administrativos adquirieron rango constitucional por virtud de la reforma del artículo 104, fracción I, de la Constitución Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el treinta de diciembre de mil novecientos cuarenta y seis, que quedó redactado de la siguiente forma:

‘ARTÍCULO 104. Corresponde a los tribunales de la Federación conocer:

I. De todas las controversias del orden civil o criminal que se susciten sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales o con motivo de los tratados celebrados con las potencias extranjeras. Cuando dichas controversias sólo afecten intereses particulares, podrán conocer también de ellas, a elección del actor, los jueces y tribunales locales del orden común de los Estados, del Distrito Federal y Territorios. Las sentencias de primera instancia serán apelables para (sic) ante el superior inmediato del juez que conozca del asunto en primer grado.

En los juicios en que la Federación esté interesada, las leyes podrán establecer recursos ante la Suprema Corte de Justicia contra las sentencias de segunda instancia o contra las de tribunales administrativos creados por ley federal, siempre que dichos tribunales estén dotados de plena autonomía para dictar sus fallos.

...

Más adelante, mediante Decreto publicado el veinticinco de octubre de mil novecientos sesenta y siete, se reformó nuevamente el artículo 104, fracción I, de la Constitución Federal, para aclarar el tipo de controversias de las que conocerá el tribunal contencioso administrativo, ya que su texto quedó en los siguientes términos:

‘ARTÍCULO 104. Corresponde a los Tribunales de la Federación conocer:

I. De todas las controversias del orden civil o criminal que se susciten sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales o de los tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano. Cuando dichas controversias sólo afecten intereses particulares, podrán conocer también de ellas, a elección del actor, los jueces

y tribunales del orden común de los Estados, del Distrito Federal y Territorios. Las sentencias de primera instancia podrán ser apelables para ante el superior inmediato del juez que conozca del asunto en primer grado.

Las leyes federales podrán instituir tribunales de lo contencioso-administrativo dotados de plena autonomía para dictar sus fallos, que tengan a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre la Administración Pública Federal o del Distrito y Territorios Federales, y los particulares, estableciendo las normas para su organización, su funcionamiento, el procedimiento y los recursos contra sus resoluciones.

Procederá el recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia contra las resoluciones definitivas de dichos tribunales administrativos, sólo en los casos que señalen las leyes federales, y siempre que esas resoluciones hayan sido dictadas como consecuencia de un recurso interpuesto dentro de la jurisdicción contencioso-administrativa.

La revisión se sujetará a los trámites que la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de esta Constitución fije para la revisión en amparo indirecto, y la resolución que en ella dicte la Suprema Corte de Justicia, quedará sujeta a las normas que regulan la ejecutoriedad y cumplimiento de las sentencias de amparo;

...

De la norma suprema transcrita se desprende que mediante ley federal se podrán crear tribunales de jurisdicción contenciosa administrativa, que tendrán a su cargo dirimir conflictos suscitados entre la Administración Pública y los particulares, lo que significa que ejercerán sus funciones jurisdicciones dentro del puro ámbito administrativo, tal como se precisó en el dictamen de la Cámara de Origen del quince de noviembre de mil novecientos sesenta y seis, que dice:

‘Del examen de los antecedentes históricos del Tribunal Fiscal de la Federación aparece que fue creado en la Ley de Justicia Fiscal expedida el 27 de agosto de 1936 por el Presidente Lázaro Cárdenas en uso de facultades extraordinarias en materia hacendaria. En el informe rendido por el propio Presidente ante el Congreso de la Unión, el primero de septiembre de 1936, manifestó que entre las principales leyes en materia hacendaria promulgadas en el curso de ese año, se encontraba ‘la que creó el Tribunal Fiscal de la Federación, destinado a la organización de los servicios de la justicia fiscal, con



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

el objeto de proteger los derechos particulares lesionados por resolver (sic) ilícitas'.-----

Sin embargo, en la Exposición de Motivos de aquella ley, yendo más allá de lo dicho por el Presidente de la República, se afirma que la ley 'representa el primer paso para crear en México tribunales administrativos dotados de la autonomía -tanto por lo que hace a facultades como a forma de proceder y a su situación orgánica- que es indispensable para que puedan desempeñar con eficacia funciones de control de la administración activa en defensa y garantía del interés público y de los derechos e intereses legítimos'. En otros términos, la ley no se limitaba a la protección de los derechos particulares, sino que aspiraba al control de la administración activa en defensa y garantía del interés público y entrañaba también el propósito de iniciar un sistema de tribunales administrativos autónomos.-----

En el Artículo 1° se declaró que el Tribunal dictaría sus fallos en representación del Ejecutivo de la Unión, pero que sería independiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de cualquiera otra autoridad administrativa. No se estableció ningún recurso ordinario contra sus fallos; por el contrario, en el Artículo 54 se previno que tendrían fuerza de cosa juzgada.-----

Es claro que, de todas maneras, los particulares tuvieron y deben tener siempre a mano el juicio de amparo para reclamar las resoluciones definitivas del Tribunal Fiscal de la Federación como lo tienen para reclamar todo acto o decisión inconstitucionales del Poder Público irreparables en la vía ordinaria.-----

La ley de 1936 fue derogada por el Artículo 2° Transitorio del Código Fiscal de la Federación, decretado por el Congreso de la Unión en diciembre de 1938; pero en el título cuarto del nuevo Código, se reprodujeron sustancialmente las disposiciones de la ley derogada. No se dijo expresamente que se creaba el Tribunal Fiscal. Simplemente se le tuvo por existente como un hecho consumado.-----

Así las cosas, por decreto del Congreso de la Unión publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1946, reformado el 30 de diciembre de 1949, se creó un recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia contra las sentencias del Tribunal Fiscal de la Federación, siendo de advertir que poco

De todo lo anteriormente expuesto, estas Comisiones deducen y plantean ante Vuestra Soberanía las siguientes consideraciones:-----



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

Primera. En el procedimiento contencioso-administrativo, la autoridad administrativa, en aras de la equidad y por respeto a las garantías de los gobernados, admite discutir la legalidad de sus decisiones y actos dentro de la misma esfera administrativa antes de llegar a una controversia ante la autoridad judicial.-----

Segunda. La creación del Tribunal Fiscal de la Federación en 1936, como primer paso para instituir un sistema de tribunales administrativos destinados a controlar internamente la legalidad de los actos de la administración activa, aparte el debate que suscita la constitucionalidad con que fue establecido ese tribunal, es, sin duda, la expresión de un propósito en favor de la seguridad jurídica, congruente con el programa de justicia social de la Revolución.-----

Tercera. En esas condiciones, si no se encuentra en ninguna de las fracciones del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos una facultad expresa de la que emane una facultad implícita para la creación de tribunales administrativos autónomos de competencia contenciosa y administrativa, y si la reforma de diciembre de 1946 que adicionó la fracción I del Artículo 104 entraña, por interpretación extensiva, tal facultad, ello constituye una conquista que no debe desvirtuarse y, por el contrario, debe consolidarse en el párrafo segundo de la fracción I del Artículo 104.-----

Cuarta. En mérito de las consideraciones anteriores se sugiere que la reforma consiste en que en el nuevo párrafo se establezca, de una manera expresa, sin que requiera dudas ni interpretaciones, que las leyes federales podrán instituir tribunales administrativos que tengan a su cargo dirimir, en vía contenciosa administrativa, las cuestiones que se susciten entre la administración pública y los particulares, instituyendo normas para su organización, su competencia, el procedimiento que deberán observar y los recursos que se estimen conducentes contra sus resoluciones, dentro de la misma esfera administrativa.-----

Quinta. Como consecuencia de la creación de los recursos ordinarios que deben desarrollarse dentro de la misma jurisdicción contenciosa-administrativa, se restringe el ámbito de procedencia de la revisión fiscal ante la Suprema Corte de Justicia, en forma de que la revisión ante ese Alto Tribunal contra las resoluciones definitivas de los Tribunales de lo contencioso-



CONTRADICCION DE CRITERIOS 2/2024

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

fracción XXIX-H, de la Constitución Federal, publicada el veinticinco de octubre de mil novecientos noventa y tres, se derogó la mención que se hacía ‘del Distrito Federal.’ (...)” [lo destacado es de origen]

110. Transcripción de la que se desprende que desde sus orígenes y como se destacó en el dictamen de quince de noviembre de mil novecientos sesenta y seis, el entonces Tribunal Fiscal de la Federación, no sólo tenía como objetivo proteger los derechos de los particulares frente a los actos fiscales ilícitos, sino que aspiraba al control de la administración pública, es decir, se traducía en un autocontrol ejercido por ésta.

111. El uno de julio de dos mil nueve, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolvió el amparo directo en revisión **882/2008** (en el que la parte quejosa se dolió de la inconstitucionalidad de los artículos 11 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y 2º de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo), en el que, en lo conducente, interpretó el artículo 73, fracción XXIX-H, constitucional – reformado el cuatro de diciembre de dos mil seis-, al tenor de las consideraciones siguientes:

“(...)

SSEXTO. A continuación, se analizan los agravios esgrimidos.

En primer término se estudian los argumentos con los que la recurrente combate la interpretación que del artículo 73,

$$(\dots)$$

Ante todo, resulta necesario transcribir la norma constitucional de que se trata:

(REFORMADA, D.O.F. 4 DE DICIEMBRE DE 2006)

Pues bien, contrariamente a lo sostenido por la recurrente, es esencialmente correcta la interpretación que hizo el Tribunal Colegiado del conocimiento del precepto constitucional de mérito.

La norma en comento establece la facultad del Congreso de la Unión para expedir leyes que instituyan tribunales de lo contencioso-administrativo, dotados de plena autonomía para dictar sus fallos, sin que en ningún momento establezca la competencia específica que deben tener éstos ni los actos de la referida administración en contra de los cuales serán procedentes los juicios que hayan de resolver; por el contrario, la norma en análisis reserva al legislador la facultad para regular, entre otros, los procedimientos correspondientes, por lo que éste tiene la atribución de determinar la competencia específica de los tribunales de que se trata, al ser ésta un presupuesto procesal, atendiendo, desde luego, a la limitante que establece la norma constitucional en comento para determinar dicha competencia, y tomando en cuenta, además, lo que al respecto establezcan diversas normas de la Carta Magna⁴³.

⁴³ En relación con lo afirmado en cuanto a que el legislador debe atender a lo que establece la norma constitucional en comento para fijar la competencia del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, resulta ilustrativa la siguiente jurisprudencia: *“TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. CARECE DE COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE NULIDAD PROMOVIDO CONTRA LA RESOLUCIÓN DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS QUE IMPONE SANCIONES ADMINISTRATIVAS A SUS SERVIDORES PÚBLICOS. De las disposiciones contenidas en el Título Segundo, Capítulo II, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, se advierte que los medios de defensa ordinarios previstos en su artículo 25, entre ellos, el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, son inaplicables tratándose de resoluciones del*



CONTRADICCION DE CRITERIOS 2/2024

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

A efecto de sustentar la determinación anterior, resulta conveniente traer a colación lo que ha señalado la doctrina en torno al procedimiento, al proceso y a la competencia.

Adolfo Alvarado Velloso define al procedimiento y al proceso de la siguiente manera: 'Se entiende por procedimiento – concepto puramente jurídico- la sucesión de actos ordenados y consecutivos, vinculados causalmente entre sí, por virtud de lo cual uno es precedente necesario del que le sigue y éste, a su turno, consecuencia imprescindible del anterior. Existe procedimiento en toda actividad, privada (orden del día, en una asamblea) o pública (procedimiento administrativo, parlamentario, etc.), que requiere de una consecución de actos. Se entiende por proceso –concepto puramente lógico- el medio de discusión de dos litigantes ante una autoridad según cierto procedimiento preestablecido por la ley. (...) De tal modo, el procedimiento es el género (aparece en todas las instancias), en tanto que el proceso es una especie de él (aparece sólo en la acción procesal, instancia que debe ser necesariamente bilateralizada⁴⁴.

Dicho autor señala que la competencia es ‘uno de los presupuestos procesales de la demanda’⁴⁵.

Por su parte, Amparo A. Oviedo sostiene que ‘Por derecho procesal entendemos la ciencia jurídica que se ocupa de establecer los procedimientos, las reglas que sirven para crear los métodos de juicio. (...) El procedimiento es, en

órgano de control de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión que impone sanciones a sus servidores públicos por faltar a las obligaciones establecidas en el artículo 8o. de la referida ley, ya que el diverso precepto 28 prevé que en caso de que sea revocada o modificada dicha resolución "se ordenará a la dependencia o entidad" que restituya al servidor público en el pleno goce de sus derechos, por lo que es indudable que la procedencia de tal juicio está referida sólo a resoluciones dictadas por órganos de la administración pública federal. Por otra parte, si bien es cierto que el artículo 11, fracción XII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa establece que procede el juicio de nulidad contra las resoluciones definitivas que impongan sanciones administrativas a los servidores públicos en los términos de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos (ahora Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos), también lo es que no debe interpretarse en forma aislada, sino en relación con el 73, fracción XXIX-H, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone que dicho Tribunal sólo tiene competencia para dirimir conflictos suscitados entre los órganos de la administración pública federal del Poder Ejecutivo Federal y los particulares, pero no para resolver controversias entre éstos y el Presidente de la República, o con los otros Poderes de la Unión. En atención a lo expuesto, se concluye que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa carece de competencia para conocer del juicio promovido contra las resoluciones dictadas por la Contraloría Interna de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, por sí o a través de la Dirección de Quejas, Denuncias e Inconformidades que impongan sanciones administrativas a sus servidores públicos." (Novena Época, registro 175182, Segunda Sala de esta Suprema Corte, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, abril de dos mil seis, tesis 2a./J. 49/2006, página 285)."

⁴⁴ Alvarado Velloso, Adolfo. *Introducción al Estudio del Derecho Procesal, Primera Parte*. Buenos Aires, Argentina, Rubinzal-Culzoni Editores, 2000. Página 43.

⁴⁵ Idem. Página XX.

Si bien el precepto constitucional en comento dispone que los tribunales de lo contencioso administrativo tendrán a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública federal y los particulares, ello no implica que les esté dotando de una competencia ilimitada para conocer de cualquier acto emitido por autoridades pertenecientes a dicha administración que afecten a los particulares, ni tampoco que constriña al legislador para dotarlos de tal competencia; **la porción normativa de que se trata, más bien acota la facultad que otorga al legislador de instituir tribunales de lo contencioso administrativo, a que estos últimos tengan a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública federal y los particulares, lo que implica que el Congreso de la Unión no podrá fijar competencia, por ejemplo, para dirimir controversias entre particulares, o bien, entre alguna autoridad que no pertenezca a la administración pública federal y un**

⁴⁷ Idem. Página 11.



CONTRADICCION DE CRITERIOS 2/2024

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

particular, salvo cuando así lo permita la Constitución (v.gr. artículos 79 y 113 del Texto Fundamental). Sin embargo, lo anterior no implica que el legislador no pueda limitar la competencia de los citados tribunales a determinadas materias, o bien, a determinado tipo de actos, siempre y cuando se inserten dentro de las áreas de competencia permitidas por la Constitución Federal.

El alcance que se debe dar a la norma constitucional en análisis, se corrobora con lo señalado en los procesos legislativos del precepto en cuestión, en sus distintas reformas, y del artículo 104, fracción I, de la Constitución Federal, en el que originalmente se previó la existencia de tribunales de lo contencioso administrativo, pues si bien como sostiene la disconforme, en aquéllos no se señaló expresamente que fuera voluntad del Constituyente que la competencia del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa se limitara a determinados actos, resoluciones o actuaciones, conforme a una ley específica, lo cierto es que de los mismos, específicamente del dictamen de la Cámara de origen del quince de noviembre de mil novecientos sesenta y seis, relativo a la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de octubre de mil novecientos sesenta y siete, se desprende lo siguiente: que el Constituyente reconoció que el entonces Tribunal Fiscal de la Federación dilucidaba conflictos de ‘carácter fiscal’ entre las autoridades hacendarias y los particulares y que su creación constituyó un ‘...primer paso para instituir un sistema de tribunales administrativos destinados a controlar internamente la legalidad de los actos de la administración activa’; y que dicho Constituyente determinó que ‘...si no se encuentra en ninguna de las fracciones del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos una facultad expresa de la que emane una facultad implícita para la creación de tribunales administrativos autónomos de competencia contenciosa y administrativa, y si la reforma de diciembre de 1946 que adicionó la fracción I del artículo 104 entraña, por interpretación extensiva, tal facultad, ello constituye una conquista que no debe desvirtuarse y, por el contrario, debe consolidarse en el párrafo segundo de la fracción I del artículo 104’.

De tal manera que de los procesos legislativos correspondientes se advierte que la voluntad del Constituyente fue instituir un ‘sistema’ de tribunales contenciosos administrativos, así como establecer de forma expresa la facultad del legislador para la creación de

tribunales administrativos autónomos de competencia contenciosa y administrativa, como lo era el entonces Tribunal Fiscal de la Federación, actualmente Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que se había creado con anterioridad, y que se encargaba específicamente de la solución de conflictos de carácter fiscal. Por tanto, no puede estimarse que la voluntad del Constituyente fuera que cualquier Tribunal Contencioso Administrativo instituido por el legislador, forzosamente debiera tener competencia para conocer de todos los actos emitidos por autoridades pertenecientes a la Administración Pública Federal que afectaran a los particulares, sin importar la materia o el tipo de acto.

(...)"

112. Ejecutoria de la que destaca que la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, estableció, al interpretar el artículo 73, fracción XXIX-H, constitucional, reformado el cuatro de diciembre de dos mil seis, que el Congreso de la Unión tenía facultad para expedir leyes que instituyeran tribunales de lo contencioso administrativo, pero no establecía la competencia específica de éstos, ni los actos de la administración pública en contra de los cuales sería procedente el juicio respectivo, en tanto que ello se reservó al legislador ordinario, sobre todo, porque la competencia era un presupuesto procesal.

113. Agregó la Sala, que si bien el citado artículo constitucional disponía que los tribunales de lo contencioso administrativo tenían a su cargo dirimir las controversias que se suscitaran entre la administración pública y los particulares, lo cierto era que ello no se actualizaba como una facultad ilimitada para conocer de cualquier acto emitido por autoridades de la



CONTRADICCION DE CRITERIOS 2/2024

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

administración pública que afectara a los particulares; sino que por el contrario, constituía un **límite** para que tales tribunales sólo resolvieran controversias suscitadas entre la administración pública federal y los particulares, por lo que el legislador no podía fijar competencia para conocer de conflictos entre particulares, o entre éstos y alguna autoridad **que no perteneciera a la administración pública federal.**

114. En ese mismo orden de ideas, la Segunda Sala, al resolver en sesión de treinta de mayo de dos mil doce, el amparo directo en revisión **555/2012** (en el que se hizo valer la inconstitucionalidad de los artículos 1º y 83 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa), interpretó el artículo 73, fracción XXIX-H, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado el cuatro de diciembre de dos mil seis⁴⁸ y de él desprendió que era facultad del Congreso de la Unión expedir leyes que instituyeran tribunales de lo contencioso administrativo, que estarían dotados de plena autonomía para dictar sus fallos y tendrían a su cargo: a) dirimir las controversias suscitadas entre la administración pública federal y los particulares y, b) imponer sanciones a los servidores públicos por las responsabilidades administrativas que determinara la ley.

⁴⁸ Cuyo texto también fue interpretado en el diverso amparo directo en revisión 882/2008, citado en el párrafo 111.

115. Asimismo, precisó que ya había establecido que el artículo 73, fracción XXIX-H, constitucional, preveía *como ratio iuris, la de establecer tribunales de lo contencioso-administrativo que diriman las controversias entre la administración pública federal y los gobernados*; lo que implicaba que la Ley Fundamental establecía *una limitante al legislador ordinario en cuanto a que el ámbito de actuación de los tribunales de lo contencioso administrativo no puede comprender, es decir, excluye a los órganos del Estado que no integren o sean parte de la administración pública federal*; lo que señaló en los términos siguientes:

“(…)

Para una mejor comprensión del asunto, se estima necesario transcribir el contenido del artículo 73, fracción XXIX-H, de la Constitución Federal, que prevé:

‘Artículo 73. El Congreso tiene facultad:

(…)

‘XXIX-H. Para expedir leyes que instituyan tribunales de lo contencioso-administrativo, dotados de plena autonomía para dictar sus fallos, y que tengan a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública federal y los particulares, así como para imponer sanciones a los servidores públicos por responsabilidad administrativa que determine la ley, estableciendo las normas para su organización, su funcionamiento, los procedimientos y los recursos contra sus resoluciones.’

Del numeral transcrito se advierte que:

- *Es facultad del Congreso de la Unión expedir leyes que instituyan tribunales de lo contencioso-administrativo;*
- *Los tribunales de lo contencioso administrativo que instituya el Congreso de la Unión, en ejercicio de su facultad*



CONTRADICCION DE CRITERIOS 2/2024

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

legislativa, estarán dotados de plena autonomía para dictar sus fallos:

- *Dichos tribunales tendrán a su cargo:*

i) *Dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública federal y los particulares, así como*

ii) Imponer sanciones a los servidores públicos por responsabilidad administrativa que determine la ley.

- El ejercicio de la referida facultad constitucional que se le otorga al Congreso de la Unión, se realizará mediante el establecimiento de las normas para la organización y funcionamiento de los tribunales contencioso administrativos, así como de las normas relativas a los procedimientos y los recursos contra sus resoluciones.

(...)

Lo expuesto pone de manifiesto que esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha determinado que efectivamente, de lo previsto en el artículo 73, fracción XXIX-H, constitucional, se desprende como ratio iuris, la de establecer tribunales de lo contencioso-administrativo que diriman las controversias entre la administración pública federal y los gobernados.

Lo cual implica que la Carta Magna, establece una limitante al legislador ordinario en cuanto a que el ámbito de actuación de los tribunales de lo contencioso administrativo no puede comprender, es decir, **excluye a los órganos del Estado que no integren o sean parte de la administración pública federal**, cuya conformación se encuentra precisada en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, cuyo artículo 1º define los órganos que la integran:

‘ARTICULO 1o.- La presente Ley establece las bases de organización de la Administración Pública Federal, centralizada y paraestatal.

La Presidencia de la República, las Secretarías de Estado, los Departamentos Administrativos y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, integran la Administración Pública Centralizada.

Los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal, las instituciones nacionales de crédito, las organizaciones auxiliares nacionales de crédito, las instituciones nacionales de seguros y de fianzas y los fideicomisos, componen la administración pública paraestatal.'

(...)"

- 117.** Por su parte, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la controversia constitucional **7/2020**⁴⁹ en sesión de veintinueve de mayo de dos mil veintitrés, señaló que el artículo 73, fracción XXIX-H constitucional (reformado el veintisiete de mayo de dos mil quince, actualmente en vigor), delimitaba la **competencia** del Tribunal Federal de

128



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

Justicia Administrativa a: **i) dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública federal y los particulares; ii) imponer sanciones a las personas servidoras públicas por responsabilidades administrativas que la ley determine como graves y a los particulares que participen en actos vinculados con estas responsabilidades; y, iii) determinar el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias por daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Federal o al patrimonio de los entes públicos federales.**

118. Esto es, precisó el Pleno del Alto Tribunal, que se trataba de una *limitante para el legislador federal, quien, si bien puede legislar en cuanto al ámbito de actuación de estos tribunales de lo contencioso administrativo, no obstante, puede hacerlo sólo respecto de los órganos que sean parte de la administración pública federal, quedando por ende excluidos aquellos órganos y entes del Estado que no formen parte de ésta; y al efecto estableció:*

“(. . .)

129. Mediante decreto de cuatro de diciembre de dos mil seis, se modificó el artículo 73, fracción XXIX-H, constitucional, para integrar la facultad de los tribunales de lo contencioso-administrativo de imponer sanciones a las personas servidoras públicas por responsabilidad administrativa que determinara la ley.

130. La evolución de la jurisdicción administrativa mexicana culminó con la reforma constitucional de veintisiete de mayo de dos mil quince, por la que se consolidó el hoy Tribunal Federal de Justicia Administrativa, se le dotó de



CONTRADICCION DE CRITERIOS 2/2024

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

asunto que retoma en esencia diversos razonamientos expuestos en el amparo directo en revisión 882/2008⁵¹, en el que se estableció que ‘el Congreso de la Unión no podrá otorgar competencia a los tribunales contencioso administrativos para dirimir las controversias que se susciten entre los particulares y los Poderes Legislativo y Judicial de la Unión; o entre aquéllos y los órganos constitucionales autónomos e, incluso, el Presidente de la República, Titular del Poder Ejecutivo Federal, quien si bien encabeza la administración pública federal, no forma parte integrante de ella’, pues la facultad de legislar que tiene conferida debe ajustarse desde luego, a las directrices que se derivan y establecen en la misma norma constitucional.

136. En este sentido, es conveniente precisar que el artículo 90 de la Constitución Política del país, establece que 'la Administración Pública Federal es centralizada y paraestatal conforme a la Ley Orgánica que expida el Congreso de la Unión', dicha conformación se detalla a su vez en los artículos 1º, 2º y 3º, todos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal:

(se transcriben)

(...)

137. Lo que hace posible concluir que la administración pública federal se subdivide en centralizada y paraestatal, la primera de éstas ejerce sus atribuciones para el despacho de los negocios del orden administrativo encomendados al Poder Ejecutivo de la Federación, mientras que la segunda tiene como función auxiliar al Poder Ejecutivo.

138. En virtud de lo anteriormente expuesto, es inconcuso para este Tribunal Pleno que, en términos del artículo 73, fracción XXIX-H, de la Constitución Política del país, la competencia conferida al Tribunal Federal de Justicia Administrativa se acota a dirimir las controversias suscitadas entre la administración pública federal, centralizada o paraestatal, y los particulares, sin incluir a los otros Poderes de la Unión (Legislativo y Judicial) ni, en consecuencia, a los órganos constitucionales autónomos.

(...)"

⁵¹ Resuelto por la Segunda Sala en **sesión de uno de julio de dos mil nueve** por **unanimidad de cinco votos** de los señores Ministros Azuela Güitrón, Góngora Pimentel, Aguirre Anguiano y Franco González Salas, y de la señora Ministra Luna Ramos.

“(. . .)

$$(\dots)$$

⁵² “(...) **SEXTO. Estudio de fondo.** El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en sus conceptos de invalidez totalmente adujo que se transgredieron en su perjuicio los artículos 6° y 49 de la Constitución Federal, en virtud que el Tribunal administrativo se extralimitó en sus facultades concedidas en el artículo 73, fracción XXIX-H de la Constitución Federal, pues la resolución interlocutoria de uno de julio de dos mil diecinueve es violatoria de su autonomía ya que se estimó que lo controvertido tenía la característica de ser definitivo, decreto o acuerdo de carácter general diverso a reglamentos; por lo cual, en términos de los artículos 3° de Ley Orgánica de ese Tribunal y 2° de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo, era procedente el juicio de nulidad y por tanto, podía conocer de aquél.”



CONTRADICCION DE CRITERIOS 2/2024

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

*los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones al señalarse en su séptimo párrafo que **las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independenciam de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones.***

Por su parte, el numeral 73, fracción XXIX-H de la Constitución Federal se advierte que es facultad del Congreso de la Unión expedir la ley que instituya el Tribunal Federal de Justicia Administrativa en ejercicio de su facultad legislativa, el cual, estará dotado de plena autonomía para dictar sus fallos y **tendrá a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública federal y los particulares.**

Por último, se indica que el Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que ahí se indican, entre otros, como los decretos y acuerdos de carácter general, diversos a los reglamentos, cuando sean autoaplicativos o cuando el interesado los controvierta con motivo de su primer acto de aplicación; así como los dictados por autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Ley última que apunta a su vez, que el juicio contencioso administrativo federal procede contra las resoluciones administrativas definitivas que establece la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y contra los actos administrativos, Decretos y Acuerdos de carácter general, diversos a los reglamentos, cuando sean autoaplicativos o cuando el interesado los controvierta en unión del primer acto de aplicación.

$$\left(\begin{array}{c} \vdots \end{array} \right)$$

Ahora bien, para una mejor comprensión de las atribuciones de dichos Tribunales, se considera pertinente realizar un análisis de su evolución histórica; para lo cual, resulta de especial relevancia precisar que los Tribunales Administrativos adquirieron rango constitucional por virtud de la reforma del artículo 104, fracción I, de la Constitución Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el treinta de diciembre de mil novecientos cuarenta y seis, que quedó redactado de la siguiente forma:

De la norma suprema transcrita se desprende que mediante ley federal se podrían crear tribunales de jurisdicción contenciosa administrativa, que tendrían a su cargo dirimir conflictos suscitados entre la Administración Pública y los particulares, lo que significa que ejercerían su jurisdicción únicamente dentro del ámbito administrativo, tal como se precisó en el dictamen de la Cámara de Origen del quince de noviembre de mil novecientos sesenta y seis, que dice:

*Debe destacarse que la reforma constitucional del artículo 104, fracción I, de la Constitución Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de octubre de mil novecientos sesenta y siete, que entró en vigor en octubre de mil novecientos sesenta y ocho, introdujo factores de gran importancia en esta materia, pues **constitucionalizó la jurisdicción administrativa especializada y autónoma**, ya que durante los primeros años de actividad del Tribunal Fiscal de la Federación, que se creó por la Ley de Justicia Fiscal de agosto de mil novecientos treinta y seis, se discutió la constitucionalidad de este organismo, por considerar, un sector de la doctrina, que invadía la esfera de atribuciones del Poder Judicial Federal.*

De igual forma, por Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de agosto de mil novecientos ochenta y siete, se adicionó la fracción I-B del artículo 104 y la fracción XXIX-H del artículo 73 de la Constitución Federal, para prever qué órgano sería el encargado de expedir las leyes que instituyeran a esos tribunales contenciosos administrativos. Los artículos adicionados quedaron redactados de la siguiente forma:

Lo anterior pone de relieve que en dicha **reforma se estableció claramente** que los Tribunales de jurisdicción contenciosa administrativa conocerían de los litigios suscitados entre la **administración pública federal y los particulares**, ya que por virtud de la reforma del artículo 73, fracción XXIX-H, de la Constitución Federal, publicada el **veinticinco de octubre de mil novecientos noventa y tres**, se derogó la mención que se hacía ‘del Distrito Federal’.

134



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

En el año dos mil seis se efectuó una modificación la fracción XXIX-H para agregar -únicamente- la facultad de imponer sanciones a los servidores públicos por responsabilidad administrativa que determinara la ley, en los siguientes términos:

$$(\dots)$$

La evolución de la jurisdicción administrativa mexicana culminó en dos mil quince, cuando se realizaron modificaciones y se erigió como tal al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, se le dotó de plena autonomía para dictar sus fallos y, de manera expresa, se señaló que tendría a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública federal y los particulares; asimismo, se determinó que sería el órgano competente para imponer las sanciones a los servidores públicos por las responsabilidades administrativas que la ley determinara como graves y a los particulares que participaran en actos vinculados con dichas responsabilidades, precepto que rige en **la actualidad** y es el siguiente:

‘Artículo 73. El Congreso tiene facultad:

$$(\dots)$$

(REFORMADA, D.O.F. 27 DE MAYO DE 2015)

XXIX-H. Para expedir la ley que instituya el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, dotado de plena autonomía para dictar sus fallos, y que establezca su organización, su funcionamiento y los recursos para impugnar sus resoluciones.

El Tribunal tendrá a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública federal y los particulares.

Asimismo, será el órgano competente para imponer las sanciones a los servidores públicos por las responsabilidades administrativas que la ley determine como graves y a los particulares que participen en actos vinculados con dichas responsabilidades, así como fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Federal o al patrimonio de los entes públicos federales.

El Tribunal funcionará en Pleno o en Salas Regionales.

Los Magistrados de la Sala Superior serán designados por el Presidente de la República y ratificados por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes del Senado de la República o, en sus recesos, por la Comisión Permanente. Durarán en su encargo quince años improrrogables.

Los Magistrados sólo podrán ser removidos de sus cargos por las causas graves que señale la ley.'

*En ese sentido, sus competencias establecidas en las leyes federales deben entenderse sobre la base de tales conflictos, es decir, si bien tienen competencia para conocer de los juicios que se promuevan contra resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se precisan en el artículo 3° de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, destacadamente los decretos y acuerdos de carácter general, diversos a los reglamentos, cuando sean autoaplicativos o cuando el interesado los controvierta con motivo de su primer acto de aplicación; así como los dictados por autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. **Lo cierto es, que conocerá de esos asuntos siempre y cuando se susciten entre la administración pública federal y los particulares.***

136



CONTRADICCION DE CRITERIOS 2/2024

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

Administración Pública Federal que lo contempla, la cual, en la parte que interesa dispone:

$$(\dots)$$

*De las disposiciones transcritas [artículos 1º, 2º y 3º de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal] se advierte que la Administración Pública Federal está integrada por la Administración Pública Centralizada y la Administración Pública Paraestatal; por tanto, la competencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa a que alude el artículo 73, fracción XXIX-H de la Constitución Federal, **se acota** a dirimir los conflictos suscitados entre dicha Administración Pública Federal y los particulares, **excluyendo así los conflictos suscitados entre los otros Poderes de la Unión y los órganos constitucionales autónomos y, los particulares.***

En efecto, al resolverse el **amparo directo en revisión 555/2012**⁵⁴, se explicó que de lo previsto en el artículo 73, fracción XXIX-H Constitucional, se desprende como ratio iuris, la de establecer tribunales de lo contencioso-administrativo que diriman las controversias entre la administración pública federal y los gobernados.

Lo cual implica que la Carta Magna, **establece una limitante** al legislador ordinario en cuanto a que el ámbito de actuación de los tribunales de lo contencioso administrativo no puede comprender, es decir **excluye**, a los **órganos del Estado que no integren o sean parte de la administración pública federal**, cuya conformación se encuentra precisada en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Así, -se dijo- el Congreso de la Unión **no podrá otorgar competencia a los tribunales contencioso administrativos para dirimir las controversias que se susciten entre los particulares** y los Poderes Legislativo y Judicial de la Unión; o entre aquéllos **y los órganos constitucionales autónomos** e, incluso, el Presidente de la República, Titular del Poder Ejecutivo Federal, quien si bien encabeza la administración pública federal, no forma parte integrante de ella, como se desprende de la ley mencionada.

⁵⁴ Resuelto por la Segunda Sala de esta Suprema Corte el 30 de mayo de 2012. A pesar de que el asunto se trate de un análisis de la fracción XXXIX-H previo a la reforma que sufrió en 2015; lo cierto es, que el precedente **puede retomarse por esta Primera Sala** debido a que la consideración medular tocante a que **el Tribunal tendrá a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública federal y los particulares**, sigue siendo la misma.

(...)"

21. Determinación que se reiteró sustancialmente, al resolverse la controversia constitucional 347/2019⁵⁵, en la que se estableció:

$$(\dots)$$

⁵⁶ Esta facultad estaba prevista a favor de los tribunales contenciosos administrativos con anterioridad a la reforma de veintisiete de mayo de dos mil quince, por la que al Tribunal Federal de



CONTRADICCION DE CRITERIOS 2/2024

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

imponer sanciones a los servidores públicos por responsabilidades administrativas que la ley determine como graves y a los particulares que participen en actos vinculados con estas responsabilidades (párrafo tercero), así como iii) imponer indemnizaciones y sanciones pecuniarias por daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Federal o al patrimonio de los entes públicos federales (párrafo tercero).

65. El dictado de la sentencia impugnada no se realizó en ejercicio de las facultades del Tribunal Federal de Justicia Administrativa previstas en el párrafo tercero del artículo 73, fracción XXIX-H, constitucional, e identificadas en el párrafo anterior con los incisos ii) y iii). Ello es así, porque la litis del juicio de nulidad resuelto mediante esta sentencia consistió en establecer si debía declararse la nulidad del oficio del INAI por el que determinó que resultaba improcedente iniciar la investigación dentro del procedimiento de verificación, no en imponer sanciones a servidores públicos o particulares con motivo de responsabilidades administrativas graves, ni en condenar a una persona al pago de una indemnización o sanción pecuniaria por daños y perjuicios a la Hacienda Pública Federal o al patrimonio de los entes públicos federales.

66. En otras palabras, mediante el conocimiento y resolución del juicio de nulidad el Tribunal Federal de Justicia Administrativa resolvió una controversia entre un particular y el INAI derivada de la emisión de un oficio por parte del Instituto que el particular consideraba ilegal. Este juicio no tenía como objeto determinar responsabilidades administrativas graves ni indemnizar o imponer sanciones por daños o perjuicios al patrimonio público.

67. Ahora bien, la sentencia impugnada no se realizó en ejercicio de la facultad del Tribunal Federal de Justicia Administrativa prevista en el párrafo segundo del artículo 73, fracción XXIX-H, constitucional, e identificada con el inciso i). Ello es así porque la facultad que este párrafo prevé a favor

Justicia Fiscal y Administrativa se le convirtió en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. El texto de la fracción vigente con anterioridad a la reforma es el siguiente:

“**XXIX-H.** Para expedir leyes que instituyan tribunales de lo contencioso-administrativo, dotados de plena autonomía para dictar sus fallos, y que **tengan a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública federal y los particulares**, así como para imponer sanciones a los servidores públicos por responsabilidad administrativa que determine la ley, estableciendo las normas para su organización, su funcionamiento, los procedimientos y los recursos contra sus resoluciones” (énfasis añadido).

68. Al respecto, es necesario tomar en consideración que el artículo 90 de la Constitución Federal, previsto en su título tercero, capítulo III, relativo al Poder Ejecutivo, establece que la administración pública federal es centralizada y paraestatal conforme a la ley orgánica que expida el Congreso de la Unión.⁵⁷ A su vez, los artículos 3 y 4 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal⁵⁸ indican que la administración pública centralizada ejerce sus atribuciones **para el despacho de los negocios del orden administrativo encomendados al Poder Ejecutivo de la Unión**, así como que las entidades de la administración pública paraestatal tienen como función **auxiliar al Poder Ejecutivo**. En estos artículos se listan como dependencias de la administración pública centralizada a las Secretarías de Estado, la Consejería Jurídica y los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética; y como entidades de la administración pública paraestatal a los organismos

La (sic) leyes determinarán las relaciones entre las entidades paraestatales y el Ejecutivo Federal, o entre éstas y las Secretarías de Estado.

El Ejecutivo Federal representará a la Federación en los asuntos en que ésta sea parte, por conducto de la dependencia que tenga a su cargo la función de Consejero Jurídico del Gobierno o de las Secretarías de Estado, en los términos que establezca la ley”.

I. Secretarías de Estado:

III. Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética a que hace referencia el artículo 28, párrafo octavo, de la Constitución”.

I. Organismos descentralizados:

III. Fideicomisos".



CONTRADICCION DE CRITERIOS 2/2024

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

descentralizados, las empresas de participación estatal, instituciones nacionales de crédito, organizaciones auxiliares nacionales de crédito, instituciones nacionales de seguros y de fianzas, y fideicomisos.

69. ***A diferencia de los órganos de la administración pública federal, los órganos constitucionales autónomos no despachan negocios del Poder Ejecutivo o lo auxilian en el cumplimiento de sus competencias constitucionales. Estos órganos están establecidos y configurados directamente en la Constitución Federal, la cual los dota de garantías de autonomía e independencia para el ejercicio de competencias y funciones propias.⁵⁹ Es decir, los órganos constitucionales autónomos no forman parte de los poderes tradicionales del Estado –el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial-, ni dependen o se subordinan a éstos, sino que mantienen con ellos relaciones de coordinación en el ejercicio de facultades propias previstas constitucionalmente.***

(...)"

122. Consideraciones que se compartieron por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la controversia constitucional **343/2019**⁶⁰.

123. Conforme a la interpretación del artículo 73, fracción XXIX-H, constitucional, realizada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los precedentes en comento, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa está dotado de plena

⁵⁹ Véanse las siguientes tesis emitidas por el Tribunal Pleno: Tesis 20/2007, de rubro “**ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS. NOTAS DISTINTIVAS Y CARACTERÍSTICAS**”, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XXV, mayo de 2007, pág. 1647 y tesis 12/2008, de rubro “**ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS. SUS CARACTERÍSTICAS**”, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XXVII, febrero de 2008, pág. 1871.

⁶⁰ Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sesión de uno de diciembre de dos mil veintiuno. Ponente: Ministro Alberto Pérez Dayán.

autonomía para dictar sus fallos y su competencia constitucional se limita a:

- A) Resolver controversias suscitadas entre la administración pública federal y los particulares,
- B) Imponer sanciones por responsabilidades administrativas graves, y
- C) Determinar el pago de indemnizaciones y sanciones pecuniarias por daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Federal o al patrimonio de los entes públicos federales.

124. En cuanto al primer supuesto identificado en el inciso A), la Administración Pública Federal, en términos del artículo 90⁶¹ de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos vigente, se divide en Centralizada -integrada por la Oficina de la Presidencia de la República, las Secretarías de Estado, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y los Órganos Reguladores Coordinados- y Paraestatal -formada por los

⁶¹ “Artículo 90.- La Administración Pública Federal será centralizada y paraestatal conforme a la Ley Orgánica que expida el Congreso, que distribuirá los negocios del orden administrativo de la Federación que estarán a cargo de las Secretarías de Estado y definirá las bases generales de creación de las entidades paraestatales y la intervención del Ejecutivo Federal en su operación. La (sic) leyes determinarán las relaciones entre las entidades paraestatales y el Ejecutivo Federal, o entre éstas y las Secretarías de Estado.
(ADICIONADO, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014)
La función de Consejero Jurídico del Gobierno estará a cargo de la dependencia del Ejecutivo Federal que, para tal efecto, establezca la ley.
(ADICIONADO, D.O.F. 10 DE FEBRERO DE 2014)
El Ejecutivo Federal representará a la Federación en los asuntos en que ésta sea parte, por conducto de la dependencia que tenga a su cargo la función de Consejero Jurídico del Gobierno o de las Secretarías de Estado, en los términos que establezca la ley.”

ERIKAYVONNE CARRILLO ALLOPEZ
7066620636466320000000000000000012629
15/05/26 18:00:00



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

Organismos descentralizados, las Empresas de participación Estatal, las Instituciones nacionales de crédito, las Organizaciones auxiliares nacionales de Crédito, las Instituciones nacionales de seguros y de fianzas y los fideicomisos- conforme a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

125. La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, vigente, dispone en sus artículos 1º, 2º y 3º, lo siguiente:

“Artículo 1o.- La presente Ley establece las bases de organización de la Administración Pública Federal, centralizada y paraestatal.

(REFORMADO, D.O.F. 11 DE AGOSTO DE 2014)

La Oficina de la Presidencia de la República, las Secretarías de Estado, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y los Órganos Reguladores Coordinados integran la Administración Pública Centralizada.

Los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal, las instituciones nacionales de crédito, las organizaciones auxiliares nacionales de crédito, las instituciones nacionales de seguros y de fianzas y los fideicomisos, componen la administración pública paraestatal.

(REFORMADO, D.O.F. 15 DE MAYO DE 1996)

Artículo 2o.- En el ejercicio de sus atribuciones y para el despacho de los negocios del orden administrativo encomendados al Poder Ejecutivo de la Unión, habrá las siguientes dependencias de la Administración Pública Centralizada:

(REFORMADA, D.O.F. 11 DE AGOSTO DE 2014)

I.- Secretarías de Estado;

(REFORMADA [N. DE E. ADICIONADA], D.O.F. 11 DE AGOSTO DE 2014)

II.- Consejería Jurídica, y

(REFORMADA, D.O.F. 11 DE AGOSTO DE 2014)

Artículo 3o.- El Poder Ejecutivo de la Unión se auxiliará en los términos de las disposiciones legales correspondientes, de las siguientes entidades de la administración pública paraestatal:

II.- Empresas de participación estatal, instituciones nacionales de crédito, organizaciones auxiliares nacionales de crédito e instituciones nacionales de seguros y de fianzas, y

126. Lo que evidencia que dentro de la Administración Pública Federal, no se encuentran los órganos constitucionales autónomos, como la Fiscalía General de la República, en tanto que ésta, aunque forma parte del Estado, no está subordinada, ni pertenece al Poder Ejecutivo Federal, puesto que no despacha sus negocios, ni lo auxilia en el cumplimiento de sus competencias constitucionales, y por tanto, tampoco integra la Administración Pública Federal.

144



129. La Fiscalía General de la República, por tanto, en su carácter de órgano constitucional autónomo, aunque forma parte del Estado, como integrante del Poder Público, no depende jerárquicamente de los poderes tradicionales (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) y por ende, sus actos no pueden estar sujetos a la revisión por parte del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que únicamente tiene competencia constitucional para conocer respecto de los conflictos suscitados entre la Administración Pública Federal y los particulares.

130. Sobre todo, si se considera, como se indicó en la exposición de motivos que dio origen a la Ley Orgánica de la Fiscalía

131. Razón por la que los conflictos prestacionales que se susciten entre la Fiscalía General de la República y sus servidores públicos, derivado de su relación administrativa, no son competencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en tanto que éste, por disposición constitucional, únicamente puede resolver las controversias entre la Administración Pública Federal y los particulares, a la que no pertenece la citada Fiscalía.

146

134. En efecto, dicha atribución del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, derivó de la reforma constitucional al artículo 73, fracción XXIX-H, de veintisiete de mayo de dos mil quince, la que se sustentó en la siguiente exposición de motivos:

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

V. La resolución, deberá notificarse personalmente al presunto responsable. En su caso, se notificará a los denunciantes únicamente para su conocimiento, y al jefe inmediato o al titular de la dependencia o entidad, para los efectos de su ejecución, en un plazo no mayor de diez días hábiles.”



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

suscrita por diputados y senadores del Grupo Parlamentario del PAN

Los que suscriben, legisladoras y legisladores federales integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido Acción Nacional en las Cámaras de Diputados y Senadores de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones a los artículos 22, 73, 74, 76, 79, 109, 113, 114, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

(...)

Sistema Nacional Anticorrupción

Si bien en México existe un marco normativo que rige la conducta de los servidores públicos y se han realizado grandes avances en su implementación, para el Partido Acción Nacional el combate a la corrupción es una condición indispensable para poder continuar el desarrollo de nuestro país en todas sus esferas. Por tanto proponemos crear un Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), que se conformará por un Comité Coordinador, un Consejo Nacional para la Ética Pública y un Comité de Participación Ciudadana. Dicho Sistema se entenderá como un conjunto de instituciones que con absoluta independencia, se coordinan entre sí para cumplir con las políticas en materia de prevención, corrección, combate a la corrupción y promoción de la integridad.

La tarea consiste en desarrollar un sistema de rendición de cuentas “horizontal”, en el cual el poder se dispersa, no existe un monopolio legal de ninguna institución y cada una de ellas es individualmente responsable. Es decir, un sistema de contrapesos diseñado para que todos los órganos públicos, en sus tres niveles, y los servidores públicos que los integran, sean responsables entre ellos y exista una real rendición de cuentas. De esta forma, el Sistema podrá manejar los conflictos de intereses en el sector público, dispersando eficazmente el poder.

El cambio radica en la forma de implementación del Sistema. México, a lo largo de los años, ha desarrollado el ejercicio

$$(\dots)$$
$$(\dots)$$

El Tribunal Federal de Justicia Administrativa contará con plena autonomía para dictar sus fallos y establecer su organización, funcionamiento, procedimientos y, en su caso, recursos contra sus resoluciones. El Tribunal tendrá a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública federal y los particulares; imponer las sanciones graves a los servidores públicos de los poderes federales y de los órganos constitucionalmente autónomos, por responsabilidades administrativas en los términos que disponga la ley; a los servidores públicos locales, por las irregularidades cometidas en el manejo o aplicación de recursos federales; y a los particulares que incurran en actos de corrupción, en los términos que determinen las leyes. Podrá imponer a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Federal o al patrimonio de los entes públicos federales. Además



CONTRADICCION DE CRITERIOS 2/2024

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

podrá imponer las siguientes sanciones: suspensión, destitución e inhabilitación.

(...)"

135. Por ende, la facultad constitucional en comento, únicamente se refiere a la imposición de sanciones por causa de responsabilidad administrativa grave, pero no a la competencia para sustanciar un procedimiento en el que se verifique la legalidad de un acto prestacional emitido por un órgano constitucional autónomo, como lo es la Fiscalía General de la República, en sus relaciones administrativas con sus miembros.

136. Aunado a esas razones, si bien el artículo 3º, fracción XVI⁶⁴, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, dispone que éste tiene competencia para conocer de resoluciones definitivas que impongan sanciones administrativas y de las que resuelvan los recursos administrativos previstos en las leyes respectivas, cuando se trate de servidores públicos, incluso de órganos constitucionales autónomos, lo cierto es que en los casos analizados por los tribunales contendientes no se impugnaron

⁶⁴ “Artículo 3. El Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación:

(...)

XVI. Las resoluciones definitivas por las que se impongan sanciones administrativas a los servidores públicos en términos de la legislación aplicable, así como contra las que decidan los recursos administrativos previstos en dichos ordenamientos, además de los órganos constitucionales autónomos:

$$(\dots)''$$

137. Sin que pasen inadvertidos para este Pleno Regional, los diversos criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los que se ha referido a la competencia por afinidad del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y los tribunales contenciosos locales, cuando se trate de actos impugnados por los miembros de los cuerpos de seguridad, que se rigen por sus propias leyes⁶⁶; sin embargo, no resultan

66 Tales como los contenidos en las tesis P./J.24/95, 2a./J. 35/99, 2ª./J. 77/95, 2ª./J. 23/96, 2ª./J. 32/96, 2ª./J. 10/97, 2ª./J. 82/98, 2ª. CLXI/98, 2ª./J. 51/2001, 2ª./J. 2/2003, 2ª./J. 77/2004, 2ª./J. 91/2007 y 2ª./J. 134/2008, de rubros: “POLICIAS MUNICIPALES Y JUDICIALES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO Y DE SUS MUNICIPIOS. SU RELACIÓN JURÍDICA ES DE NATURALEZA ADMINISTRATIVA”, “POLICÍA AUXILIAR DEL DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL PARA CONOCER DEL JUICIO LABORAL EN EL QUE SE RECLAMEN PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.”, “COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS CONFLICTOS SUSCITADOS CON MOTIVO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE POLICÍAS MUNICIPALES Y JUDICIALES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO Y SUS MUNICIPIOS, CON LAS DEPENDENCIAS DE SEGURIDAD RESPECTIVAS. CORRESPONDE, POR AFINIDAD, AL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO”, “COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS CONFLICTOS DERIVADOS DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE LOS POLICIAS. CORRESPONDE AL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. (ESTADO DE SAN LUIS POTOSI)”, “COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS CONFLICTOS SUSCITADOS CON MOTIVO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE POLICIAS DEPENDIENTES DEL ESTADO DE MEXICO. CORRESPONDE POR AFINIDAD AL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (LEGISLACION DEL ESTADO DE MÉXICO)”, “COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS CONFLICTOS DERIVADOS DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE LOS POLICIAS MUNICIPALES. CORRESPONDE AL TRIBUNAL FISCAL DEL ESTADO (LEGISLACION DE TAMAULIPAS)”, “COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS CONFLICTOS PLANTEADOS EN CONTRA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL, POR UN POLICÍA. CON MOTIVO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS. CORRESPONDE. POR



CONTRADICCION DE CRITERIOS 2/2024

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

aplicables para resolver la presente contradicción de criterios, al haberse sustentado cuando la entonces Procuraduría General de la República era parte de la Administración Pública Federal.

138. Bajo ese contexto, la pregunta inicial materia de la presente contradicción de criterios, relativa a **si es improcedente el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por razón de competencia, en términos de lo previsto en el artículo 8º, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en contra de actos derivados de conflictos suscitados por la prestación de servicios, entre la Fiscalía General de la República, en su calidad de órgano constitucional autónomo y sus miembros, en su**

AFINIDAD, AL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL”, “COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS ASUNTOS DERIVADOS DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOS AGENTES DE LA POLICÍA JUDICIAL FEDERAL. CORRESPONDE, POR AFINIDAD, AL TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACIÓN” “COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS CONFLICTOS DERIVADOS DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MIEMBROS DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE MORELOS. CORRESPONDE, POR AFINIDAD, AL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA ENTIDAD”, “COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS CONFLICTOS DERIVADOS DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MIEMBROS DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE TLAXCALA. CORRESPONDE, POR AFINIDAD, A LA SALA ELECTORAL-ADMINISTRATIVA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ESA ENTIDAD FEDERATIVA”, “SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO. DE LOS CONFLICTOS SUSCITADOS CON MOTIVO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SUS AGENTES CORRESPONDE CONOCER, POR AFINIDAD, AL TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO”, “SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO. LA COMPETENCIA PARA CONOCER DE SUS CONFLICTOS CON LOS MIEMBROS DE UNA INSTITUCIÓN POLICIAL CORRESPONDE AL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA ENTIDAD” e “INSTITUTO DE LA POLICÍA AUXILIAR Y PROTECCIÓN PATRIMONIAL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. LA COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS CONFLICTOS CON SUS MIEMBROS CORRESPONDE, POR AFINIDAD, AL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA ENTIDAD” respectivamente.

VII. CRITERIO QUE DEBE PREVALECER.

VIII. DECISIÓN.

PRIMERO. Es inexistente la contradicción de criterios denunciada respecto de lo resuelto por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en el juicio de amparo directo **688/2023**.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

SEGUNDO. Existe la contradicción de criterios suscitada entre el Primero, Segundo, Cuarto, Décimo Segundo y Decimoctavo Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Primer Circuito.

TERCERO. Debe prevalecer con carácter de jurisprudencia el criterio sustentado por este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México.

Notifíquese; remítase testimonio de la presente resolución a los órganos colegiados contendientes y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.

Así lo resolvió este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro–Norte, con residencia en la Ciudad de México, por unanimidad de votos del entonces Magistrado Alejandro Villagómez Gordillo (presidente) y de las Magistradas Silvia Cerón Fernández (ponente) y Adriana Leticia Campuzano Gallegos; y, de conformidad con lo establecido en el párrafo segundo del artículo 188 de la Ley de Amparo, en relación con lo dispuesto en el diverso 42 del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales, firman las Magistradas Silvia Cerón Fernández (ponente) y Adriana Leticia Campuzano Gallegos,

156



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA - TRANSACCIÓN

Archivo Firmado:
93201844_4386000034261656017.p7m
Autoridad Certificadora:
Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal
Firmante(s): 4

FIRMANTE				
Nombre:	ERIKA IVONNE CARBALLAL LOPEZ	Validez:	BIEN	Vigente
FIRMA				
No Serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.01.26.29	Revocacion:	Bien	No revocado
Fecha (UTC/ CMDX)	13/11/24 16:09:00 - 13/11/24 10:09:00	Status:	Bien	Valida
Algoritmo:	RSA - SHA256			
Cadena de firma:	bd a8 a3 48 b1 e4 9d 57 20 75 41 e4 97 d3 8b 09 e7 6a 40 ff 1c 0e fb ce f9 c0 54 0f ef 21 d4 d3 e6 f6 5b d7 fc fd fb f4 3c 9a 79 7d 66 92 31 ee 43 94 11 56 0e 83 05 ab f8 40 16 98 4b b9 e6 fb e2 ff 6f 64 d3 aa 23 e0 ff f2 52 79 cb 07 f4 56 d9 a1 68 9a 43 66 86 cd 8c f9 26 d5 32 e0 2b b5 33 66 90 e2 f7 f6 7f 41 c2 c3 13 a3 74 38 5c 7a bf c4 89 e3 f6 83 f2 b3 1c ca 6d 1c cd 74 80 b9 d4 a4 5e 4a bd 2b a2 68 7e 59 23 c4 c7 a3 f6 43 f6 62 4e 06 87 d8 61 65 8f 63 87 99 ce 41 78 47 51 bb 76 65 c6 ce a4 8b 57 a9 34 7e 5c 3a d2 b3 e6 fd 2e c1 74 ae 0e da 19 9c 4b 4a 6d f6 38 90 5d af 39 e3 d0 de 2a a7 26 1f 08 e4 dd 01 a7 ed b7 34 62 6b 8a c1 87 c2 9c 26 1b e3 5f cf b6 4e 6f 29 57 12 9e 36 4d 27 b7 0f 6d 9e a7 ff b2 15 a8 18 2a 01 a6 d6 0c ad 0e cd 09 8a 53 24 b1 e2			
OCSP				
Fecha: (UTC/ CMDX)	13/11/24 16:09:01 - 13/11/24 10:09:01			
Nombre del respondedor:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Numero de serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.01.26.29			
TSP				
Fecha : (UTC/ CMDX)	13/11/24 16:09:02 - 13/11/24 10:09:02			
Nombre del emisor de la respuesta TSP:	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Identificador de la respuesta TSP:	186976623			
Datos estampillados:	FHN434hENExwVzegb/T94qyK3KU=			



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FIRMANTE				
Nombre:	SILVIA CERON FERNANDEZ	Validez:	BIEN	Vigente
FIRMA				
No Serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.01.16.59	Revocacion:	Bien	No revocado
Fecha (UTC/ CMDX)	13/11/24 16:47:38 - 13/11/24 10:47:38	Status:	Bien	Valida
Algoritmo:	RSA - SHA256			
Cadena de firma:	28 85 31 25 82 5e 01 ac 0d 93 01 42 81 9b 40 9a 7f 18 b8 d0 33 27 ce d5 26 43 6a 18 c3 2e 33 26 0c 49 55 86 c2 6b bc 4c 14 50 19 59 e0 18 f7 80 5b 7e 65 07 d7 0e 80 af c3 0e 4f 50 88 55 53 07 6d 30 1b 3d 37 a5 6d 0e 63 a1 81 de 3f 2f 1e d7 f5 f8 68 cf 8a 46 d6 c0 13 a3 82 e4 97 30 c7 b4 0f f3 15 47 25 46 a6 60 7c 28 9d 4f d0 0d 13 89 60 63 7c 4e d4 7d 43 7a 4f 5a 24 b3 36 33 51 59 62 d8 2f 3f 18 9c bc 90 26 fd 73 4b 7d d7 9c c0 65 53 04 e0 4a d7 dc dd 58 59 64 8d 4f 86 d1 a2 24 dc 26 cc 7d ed 69 d6 a8 1f b1 89 10 61 1f 57 ba e3 d2 59 4c 1a c4 db 66 5a 7b 34 05 da c8 6c 13 bd 2c ac 3e 57 84 ec bb 3a 57 00 76 8d 6e 44 a1 24 77 ea 46 2a 5f 87 33 fb 21 8a 92 ba e4 1c 70 41 33 e8 46 34 2b 09 3f 14 69 01 c6 98 ef 0a d9 0b 39 1a 24 4b 4d be c0 e2 d5 2a 70 9c 6f 95			
OCSP				
Fecha: (UTC/ CMDX)	13/11/24 16:47:38 - 13/11/24 10:47:38			
Nombre del respondedor:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Numero de serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.01.16.59			
TSP				
Fecha : (UTC/ CMDX)	13/11/24 16:47:39 - 13/11/24 10:47:39			
Nombre del emisor de la respuesta TSP:	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Identificador de la respuesta TSP:	187008159			
Datos estampillados:	JqSleS+fwNmdYBAAdvlcCi4py7js=			



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FIRMANTE				
Nombre:	MARCO ANTONIO RODRIGUEZ BARAJAS	Validez:	BIEN	Vigente
FIRMA				
No Serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.01.11.45	Revocacion:	Bien	No revocado
Fecha (UTC/ CMDX)	13/11/24 17:06:46 - 13/11/24 11:06:46	Status:	Bien	Valida
Algoritmo:	RSA - SHA256			
Cadena de firma:	41 48 d0 56 af 9d ca 4c 82 ce db 04 25 1a 4a b3 05 c4 a2 2f d1 da c2 3d 4c 8e f8 43 3d 20 a5 5c 40 d9 49 a0 2a 07 d1 c3 5a 4f ca 14 ac 82 be e7 b4 b6 5d 22 b0 27 1a df da 20 82 32 51 c0 74 98 17 47 e1 c9 c4 d7 6d ed 04 40 43 f1 cd 90 99 57 83 67 71 52 2d bb ea 36 64 a7 f7 24 4e 42 20 76 b5 3f 2b 06 12 a4 04 26 fe b2 6b 43 e1 e7 92 dd 86 ad a8 de f5 81 7e 4a 9f 21 07 bd d1 38 87 3a 40 e2 f1 c8 a2 c9 43 a0 5b f3 f0 51 dc 11 fb 36 e7 f3 07 5a 25 35 46 69 92 9d fd 28 73 ab 23 a1 fc 7d 8c 0f 30 a5 60 18 0c 48 7d 3e 60 e4 47 1b f8 29 d2 79 03 20 b1 f1 a5 c3 1a ff ee fd fe 1e f4 2a 6d f4 b7 2d b6 46 4b 7a d5 99 8f f5 7e 78 0a 69 65 cd db a8 70 51 e4 b6 ba af 80 69 cd 44 16 ba 5e 62 dc 98 b0 57 4e b3 cd 3d 26 5f 2a 92 ed 1d c0 3b 1b c0 34 46 2a b0 a8 80 f2 e2 56 d2			
OCSP				
Fecha: (UTC/ CMDX)	13/11/24 17:06:46 - 13/11/24 11:06:46			
Nombre del respondedor:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Numero de serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.01.11.45			
TSP				
Fecha : (UTC/ CMDX)	13/11/24 17:06:47 - 13/11/24 11:06:47			
Nombre del emisor de la respuesta TSP:	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Identificador de la respuesta TSP:	187024569			
Datos estampillados:	Z0tyxAQjkCHj5/+E22Izn6kx86Y=			



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FIRMANTE				
Nombre:	ADRIANA LETICIA CAMPUZANO GALLEGOS	Validez:	BIEN	Vigente

FIRMA				
No Serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.28.41	Revocacion:	Bien	No revocado
Fecha (UTC/ CMDX)	13/11/24 17:29:01 - 13/11/24 11:29:01	Status:	Bien	Valida
Algoritmo:	RSA - SHA256			
Cadena de firma:	3e 3c 60 72 d4 89 3b 2b 0c c3 dc b2 f2 e4 f9 74 c5 31 8a ea f9 7b 22 11 94 6e e5 b0 9c c4 a0 4f 02 98 cd b5 44 b4 0e fc 8e aa ea 69 a0 9f 4f 2a d3 b3 d3 5f f2 b8 fa 83 65 ec 63 bb d2 51 64 8b 16 f3 c3 ee b4 a0 18 51 32 fc 03 4e 03 fd 8d 1e 19 32 d8 81 89 3b 5e 77 01 ab 4d f6 ea 18 30 97 88 a5 f4 d8 c5 41 bc 15 33 6f b1 f9 db cd 95 b7 b1 02 9a 2f 5c c9 70 0f 9d 7b 81 d0 0d b6 a3 48 0b a5 7a 43 b9 81 d2 66 f2 0e c0 b6 d3 9e 45 56 ac 10 24 a2 2d a5 73 68 0e e7 2f f1 be 67 0f df 82 e4 47 b7 58 97 24 fa e7 b8 da 83 db 97 61 cf 7c 56 87 2e 94 13 7b 2f b6 bb b5 04 07 a9 65 39 5b e4 d1 a4 a0 26 2b 84 ee aa d8 89 07 3c a9 2d 02 88 17 74 db 15 07 05 78 11 b4 7d 75 a4 75 cc 13 be 5a ae c6 93 9e 78 25 51 c5 06 ae a1 94 56 d8 df 37 ac e9 dd 1f 68 8e 88 a8 ac ce f9 8d 7a			

OCSP	
Fecha: (UTC/ CMDX)	13/11/24 17:29:01 - 13/11/24 11:29:01
Nombre del respondedor:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal
Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal
Numero de serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.28.41

TSP	
Fecha : (UTC/ CMDX)	13/11/24 17:29:05 - 13/11/24 11:29:05
Nombre del emisor de la respuesta TSP:	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal
Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal
Identificador de la respuesta TSP:	187043369
Datos estampillados:	8TASAAJjzbHE+yOVmk0lqshQ4kw=